

**IMPLICACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DEL
GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS
DE SEGURIDAD NACIONAL DE VENEZUELA, BRASIL Y PERÚ**

MARIA CAMILA GALVIS RODRÍGUEZ

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C.,2015**

“Implicaciones de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Álvaro Uribe en el desarrollo de las estrategias de seguridad Nacional de Venezuela, Brasil y Perú”

Monografía de Grado
Presentado como requisito para optar al título de
Internacionalista
En la Facultad de Relaciones Internacionales
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentada por:

María Camila Galvis Rodríguez

Dirigida por:

Germán Alberto Sahid Garnica

Semestre II, 2015

A mis padres por guiarme y apoyarme en cada proceso de mi vida.

AGRADECIMIENTOS

La lista de personas a las que quiero agradecer por hacer parte de mi vida durante mi paso por la Universidad del Rosario es innumerable, sin embargo existen dos personas a las que, sin lugar a dudas, debo todo lo que soy y mis logros: Mis Padres. Sin ellos no hubiese podido culminar esta y ninguna etapa de mi vida, ya que su entrega, amor y dedicación han hecho de mí una persona comprometida, responsable y convencida de que con esfuerzo se logran las metas.

A mis padres solo me resta expresarles mi admiración y agradecimiento por los esfuerzos que han realizado para que hoy pueda decir que culminé mis estudios profesionales en una de las instituciones más prestigiosas y respetadas del país.

A la Universidad del Rosario quiero agradecerle por permitirme formarme personal y profesionalmente en un entorno caracterizado por la excelencia y el compromiso, gracias por hacer parte de la consolidación de mi proyecto de vida.

Finalmente quiero agradecer a mis profesores, ya que sus conocimientos, apoyo y dirección permitieron que hoy llegue a la culminación de mi carrera universitaria, especialmente quiero agradecer a mi director de monografía, ya que sin él no hubiese sido posible la finalización del presente trabajo de grado.

Agradezco a todos y cada uno de los que hicieron parte en mi formación personal y profesional durante estos 5 años.

RESUMEN

La presente monografía tiene por objeto estudiar y analizar las reacciones generadas en Venezuela, Brasil y Perú ante la implementación de la Política de Seguridad Democrática en Colombia, pues el desarrollo de una política de seguridad nacional termina generando en múltiples ocasiones lo que Robert Jervis denomina un Dilema de Seguridad. Así pues se hará necesario demostrar los resultados de dicha política para la seguridad nacional del Estado colombiano para posteriormente evaluar las implicaciones para la seguridad de los Estados vecinos y finalmente estudiar los mecanismos adoptados por estos con el fin de preservar su seguridad y disminuir la posible amenaza representada por Colombia.

Palabras Clave:

Dilema de Seguridad, Amenaza, Percepción, Seguridad Nacional.

ABSTRACT

The principal objective of this paper is to study and analyze the reactions of Venezuela, Brazil and Peru after the implementation of the Democratic Security Policy in Colombia, because the development of that national security policy involved the generation of what Robert Jervis call the Security Dilemma. At the beginning of this paper it will be necessary to demonstrate the results of that policy in the colombian national security and also evaluate the implications for the national security of the neighbouring countries. Finally it will study the mechanisms used by the neighbouring governments in order to preserve the security of their countries and decrease the colombian threat.

Key Words:

Security Dilemma, Threat, Perception, National Security.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
1. SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN COLOMBIA: MECANISMO DE CONTENCIÓN DE LAS AMENAZAS INTERNAS.	10
1.1 Situación de seguridad en Colombia: antecedentes de la implementación de la política de seguridad democrática.	11
1.2. En busca de la seguridad nacional: principios y acciones emprendidas para el mantenimiento del orden estatal.	14
2. VENEZUELA: RESPUESTAS A UN VECINO AMENAZANTE.	22
2.1 Percepciones de amenaza: Divergencias en materia de seguridad.	22
2.2 Política de seguridad venezolana: estrategias para la defensa de la integridad estatal.	26
3. BRASIL: ENTRE LA COOPERACIÓN Y LA AMENAZA	30
3.1 Coincidencias y divergencias en el tratamiento a la ilegalidad.	30
3.2 Respuestas de un líder regional	34
4. PERÚ: EL ALIADO REGIONAL	38
4.1 Lucha contra la ilegalidad: punto clave en la cooperación bilateral.	38
4.2 Lucha contra las amenazas bilaterales: Mecanismos de cooperación.	41
5. CONCLUSIONES	44

LISTA DE SIGLAS

CCFFAA	Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
CNMH	Centro Nacional de Memoria Histórica
COMBIFRON	Comisión Binacional Fronteriza
CSD	Consejo Suramericano de Defensa
DAPRE	Presidencia de la República de Colombia
EMBRAER	Empresa Brasileira de Aeronáutica
END	Estrategia Nacional de Defensa
FANB	Fuerza Armada Nacional Bolivariana
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FUDRA	Fuerza de Despliegue Rápido
GTBP	Grupo de Trabajo Bilateral para Asuntos Policiales
JOEC	Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas
MAN	Mecanismo de Alto Nivel de Seguridad y Cooperación Judicial
MINDEFENSA	Ministerio de la Defensa (Colombia)
PDP	Política de Desarrollo Productivo

PSD Política de Seguridad Democrática

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute

INTRODUCCIÓN

Por más de medio siglo el Estado colombiano se ha enfrentado a la existencia de grupos criminales que han afectado la estabilidad del Estado y por lo cual se han convertido en una amenaza para el mantenimiento del mismo. Así pues múltiples Gobiernos han implementado acciones claras para para contrarrestar fenómenos como el narcotráfico y el terrorismo, los cuales se han consolidado como temas de gran relevancia para Colombia no solo en la agenda nacional sino también en la articulación de la política exterior del Estado

El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se comprometió en emprender una lucha directa en contra de los grupos terroristas colombianos y para ello benefició el fortalecimiento del aparato militar y emprendió acciones que generaron polémica en la región debido a las implicaciones para la seguridad del resto de Estados, especialmente los vecinos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente monografía de grado tiene por objeto analizar el Dilema de Seguridad generado en Venezuela, Brasil y Perú como resultado de la implementación de la Política de Seguridad Democrática en Colombia, pues al ser Estados vecinos tuvieron un mayor grado de afectación por las medidas llevadas a cabo en Colombia.

A lo largo de la presente investigación se buscan estudiar las respuestas dadas por Venezuela, Brasil y Perú ante el dilema de seguridad generado por Colombia, para ello se hace necesario contar con un fundamento teórico de peso que permita dar luz al objeto de estudio, así pues se implementarán el Realismo Defensivo de Jeffrey Taliaferro y el Neorrealismo de Robert Jervis como teorías complementarias que a través de sus supuestos permitirán comprender la situación de seguridad generada en los Estados vecinos tras la implementación de la Política de Seguridad Democrática.

La monografía se encuentra dividida en cuatro capítulos. El primero tiene como objetivo analizar la situación de seguridad en Colombia tras la implementación de la Política de Seguridad Democrática (PSD), pues para analizar el dilema de seguridad es necesario evaluar y evidenciar que se generó un cambio positivo en materia de seguridad en el Estado que implementó la política.

El segundo capítulo está destinado a explicar la situación resultante con Venezuela, analizando la relación entre ambas naciones y adicionalmente generar una revisión de los mecanismos implementados por Venezuela para hacer frente a la amenaza proveniente de Colombia.

Un tercer capítulo abordará la relación colombo- brasilera en cuanto a temas de seguridad, estudiando los mecanismos implementados por Brasil para contra restar el dilema de seguridad con Colombia teniendo en cuenta el carácter de líder regional del Estado brasilero. Finalmente el cuarto capítulo será destinado al estudio del dilema de seguridad entre Perú y Colombia y los mecanismos implementados por el Estado peruano con el fin de garantizar su seguridad.

A pesar de que Venezuela, Brasil y Perú son Estados vecinos y los tres estuvieron expuestos al mismo estímulo (Política de Seguridad Democrática), la presente investigación permitirá analizar las variaciones resultantes debido a factores estructurales y domésticos, así pues a partir del segundo capítulo se abordarán situaciones objetivas (estímulos) para analizar las diferencias entre las respuestas emitidas de estos tres Estados.

Con respecto al proyecto de monografía presentado con anterioridad, se puede afirmar que no fue necesario realizar cambios en lo que respecta a marco teórico, objetivos y variables a estudiar, pues dichos elementos fueron fundamentales para lograr el objetivo del trabajo investigativo.

Si bien es cierto que existen múltiples investigaciones respecto a las dinámicas de seguridad generadas en Suramérica durante los años a estudiar, la presente monografía tiene como supuesto que dichas dinámicas surgen como resultado de los cambios efectuados en Colombia en materia de seguridad, estableciendo así que las políticas de seguridad nacional tuvieron influencia en los planteamientos de seguridad de los otros Estados.

Finalmente es necesario establecer que esta monografía es un estudio de tipo cualitativo y para su realización se emplearán artículos académicos, libros, videos y artículos de prensa con el fin de recolectar información pertinente para la consecución del objetivo general propuesto desde el proyecto de monografía.

1. SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN COLOMBIA: MECANISMO DE CONTENCIÓN DE LAS AMENAZAS INTERNAS.

Desde la segunda mitad del siglo XX el Estado colombiano ha visto en riesgo su estabilidad política y social debido al surgimiento de grupos armados al margen de la ley que han desafiado su institucionalidad y han generado un panorama de inseguridad y horror dentro de la población.

A pesar de la situación de inseguridad que ha vivido el Estado colombiano por más de 60 años, los distintos gobiernos nacionales habían privilegiado otros temas de la agenda nacional y se había relegado el tema de la seguridad a un segundo plano, pues se habían beneficiado las temáticas de índole social y económico (Rangel y Medellín 2010, pág. 3). Sin embargo, durante los Gobiernos de Belisario Betancur y Andrés Pastrana se iniciaron mecanismos de negociación con los alzados en armas para poner fin al conflicto, esfuerzos que posteriormente demostrarían haber sido ineficientes debido al reforzamiento del aparato militar de los criminales y a las múltiples acciones realizadas por estos para infundir terror dentro de la población y desestabilizar el orden estatal.

En el 2002 con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República se dio una reforma en los asuntos de seguridad pues por primera vez este tema fue eje central de la política nacional e igualmente se concedió un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas pues hasta ese momento “en el discurso político prevaleció una actitud antimilitarista, que se veía reflejada en una débil participación del sector defensa dentro del presupuesto nacional” (Rangel y Medellín 2010, pág. 4).

Gracias a ello durante la administración de Álvaro Uribe Vélez se desarrollaron la Política de Defensa y Seguridad Democrática y posteriormente la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática como mecanismos de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, con el objetivo de poner fin a la amenaza representada por los grupos armados al margen de la ley para el Estado colombiano.

Así pues, el presente capítulo busca analizar el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática para así observar y estudiar los cambios y resultados en materia de seguridad en el Estado colombiano tras la implementación de dicha política

1.1. Situación de seguridad en Colombia: antecedentes de la implementación de la Política de Seguridad Democrática.

El periodo presidencial de 1998 a 2002 se consolida como un factor crucial para entender el desarrollo de las políticas de seguridad del Estado colombiano en los años posteriores, pues la presidencia de Andrés Pastrana Arango terminó legitimando y fortaleciendo el discurso de Álvaro Uribe Vélez durante la campaña presidencial de 2002.

La administración Pastrana (1998-2002) se enfocó en el desarrollo de “una estrategia para la paz dirigida personalmente por el presidente” (Pastrana 2005, pág. 32), con el fin de concluir el conflicto entre el Estado y las FARC.

Al inicio de la administración de Andrés Pastrana las FARC estaban en su pleno vigor militar y con la pretensión de obtener una mayor proyección política (Pizarro 2011, pág. 205), situación que les permitió realizar exigencias al Gobierno nacional para iniciar la negociación, por lo que uno de los primeros actos realizados por Andrés Pastrana tras su posesión fue proferir la Resolución No. 085 del 14 de Octubre de 1998, la cual tenía como propósito reconocer y definir los municipios que harían parte de la Zona de Distensión, una zona de cerca de 42.000 km² y, adicionalmente dotaba de un estatus político a las FARC-EP para así poder iniciar el proceso de paz (Pizarro 2011, pág. 259).

Tras la emisión de los decretos y el cumplimiento por parte del Gobierno nacional a las peticiones de las FARC, se realizó la instalación de la mesa de negociaciones el 7 de enero de 1999, evento en el que se había acordado que asistiría el Presidente de la República y Manuel Marulanda Vélez como representante de las FARC. Sin embargo, el líder de las FARC no se presentó dando como excusa las pocas garantías a su seguridad por lo que tal acto debió realizarse a pesar de la “silla vacía” de Marulanda. La inasistencia de Manuel Marulanda no fue el único incumplimiento por parte del grupo guerrillero, pues en múltiples ocasiones generaron congelamientos unilaterales a las negociaciones.

Desde el principio de las negociaciones las partes acordaron que la confrontación armada persistiría a lo largo del territorio nacional con excepción de la Zona de Distensión (Pizarro 2011, pág. 205), situación que fue aprovechada por ambas partes para un fortalecimiento militar.

Las FARC aprovecharon el cese de las acciones armadas en la Zona de Distensión para reforzar su accionar, pues “tenían claro desde un principio que su objetivo no era la paz sino el fortalecimiento de sus tropas y la obtención de un estatus de beligerancia, vale decir, de un reconocimiento de la comunidad internacional” (Santos 2009, pág. 63). Poco a poco se incrementaron las acciones delictivas de esta organización guerrillera, no solo mediante las prácticas tradicionales como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, sino también mediante la aplicación de nuevos mecanismos para infundir terror tales como las pescas milagrosas, la utilización de cilindros bomba y “el secuestro de políticos como ocurrió con Ingrid Betancourt y los diputados del valle”(Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] 2013, pág. 199).

Los diálogos adelantados por el Gobierno nacional con los cabecillas de las FARC fueron dinamitados por diversos acontecimientos, sin embargo el hecho que el evento detonante de la ruptura de los diálogos del Caguán fue el secuestro del Senador Jorge Gechem Turbay el 20 de febrero 2002 pues tal como lo menciona Pastrana (2005, pág. 471), el hecho de que aterrizaran un avión en una carretera del Departamento del Huila y secuestraran al Senador Gechem quien era el presidente de la Comisión de Paz del Senado, hacía indefendible cualquier esfuerzo por continuar el proceso por tratarse de actos calificados como terroristas por la comunidad internacional.

Es así como el mayor proyecto de la administración Pastrana culminó sin lograr su cometido, sin embargo el desarrollo de elementos como el alineamiento con Estados Unidos y por consiguiente el Plan Colombia, se consolidaron como factores clave en el desarrollo de estrategias de seguridad encaminadas al desmantelamiento de los grupos generadores de violencia.

Uno de los mayores logros alcanzados por la administración Pastrana fue el apoyo por parte de Estados Unidos a través del denominado Plan Colombia, pues no solo contribuyó en la lucha contra el narcotráfico, sino que tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, dicho presupuesto empezó a ser utilizado para el combate en contra de los grupos terroristas.

A pesar que los mecanismos de cooperación entre Colombia y Estados Unidos fueron negociados con el fin de apoyar la lucha contra el narcotráfico dentro de territorio colombiano, fue percibido por otros Estados como un elemento amenazante, pues las acciones desarrolladas a través del Plan Colombia expandían el problema de las drogas a otros territorios, especialmente a los de los Estados fronterizos (Tokatlian 2009, pág. 237).

Igualmente es necesario establecer que la presencia de Estados Unidos generó descontento en la región, pues no se consideraba necesaria la presencia de este Estado, muestra de ello el Estado brasilero declaró que el problema de las guerrillas debía ser tratado por Colombia sin la ayuda de terceros (Castro 2006, pág. 18).

Igualmente la presencia de Estados Unidos a través de apoyo a Colombia amenazaba las aspiraciones de ciertos Estados de la región como Brasil, pues se consideraba que iba a ser un mecanismo utilizado para vigilar la amazonía, región que para el Estado brasilero se convirtió en una zona fundamental para su proyecto de liderazgo y por tanto punto referente para la defensa nacional.

Al momento de la implementación del Plan Colombia, el Estado venezolano se encontraba en un proceso de transición política con la llegada de Hugo Chávez al poder, quien optaría por imponer un nuevo régimen en el Estado. A pesar de que la ideología del nuevo régimen era opuesta a la estadounidense, el Estado norteamericano no había generado acciones que amenazaran la estabilidad social o política venezolana.

El Plan Colombia recibió múltiples cuestionamientos en la región, sin embargo no se consolidó como una amenaza directa para los Estados vecinos, pues hasta ese momento Colombia no se había mostrado como un actor amenazante ni había desarrollado acciones que violaran la soberanía de su vecinos.

Sin embargo tras la utilización de recursos del Plan Colombia para la lucha contra el narcotráfico y la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) el

Estado colombiano emprendió acciones que generaron desconfianza y percepción de amenaza por Estados de la región y especialmente de sus Estados fronterizos.

1.2. En busca de la seguridad nacional: principios y acciones emprendidas para el mantenimiento del orden estatal.

La degradación de la seguridad estatal al momento de la llegada de Álvaro Uribe a la Casa de Nariño era evidente e, inclusive, el día de la posesión presidencial se efectuaron dos atentados terroristas :una granada de mortero fue lanzada contra la Casa de Nariño resultando heridos varios miembros del cuerpo de seguridad que vigilaba el lugar y otro atentado registrado a cuatro cuadras del Capitolio Nacional que dejó 14 muertos y 59 heridos (Semana 2002, párr. 2) requiriéndose desde el mismo día de la toma de posesión presidencial de un accionar ejecutivo concreto para retomar el orden estatal.

Una de las primeras acciones emprendidas durante el Gobierno de Álvaro Uribe fue la publicación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, la cual tenía por objeto “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos” (Ministerio de Defensa Nacional [Mindefensa]- Presidencia de la República [DAPRE], 2003). Para el desarrollo de dicha política el gobierno nacional estableció la necesidad de coordinar estrategias conjuntas entre la ciudadanía y el Estado, el cual no estaría representado únicamente por el poder ejecutivo sino que incluiría el accionar de las diferentes ramas del poder público pues

La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad (Ministerio de Defensa Nacional [Mindefensa]- Presidencia de la República [DAPRE] 2003, pág. 12).

Sin embargo, el papel de las Fuerzas Armadas durante la implementación de la Política de Seguridad Democrática fue fundamental, pues a través de ellas se hizo posible iniciar una ofensiva en contra de los grupos terroristas a través de acciones que permitieron recuperar las carreteras y los municipios del país que habían sido aislados por los ataques guerrilleros, pues en el 2002 eran 168 los municipios de los cuales los grupos irregulares habían expulsado a la fuerza pública (Rangel y Medellín 2010, pág. 7). Para ello se hizo necesaria la implementación de medidas que garantizaran una re estructuración y re

organización dentro de la fuerza pública para que estas logaran su misión de recuperar el orden nacional.

En primer lugar es necesario establecer que el mejoramiento de las Fuerzas Armadas fue posible gracias al incremento en el presupuesto destinado por el Estado a la cartera de defensa, para lo cual el Gobierno Nacional destinó recursos provenientes del Plan Colombia y adicionalmente decretó el impuesto al patrimonio. Tal como estableció el Mindefensa en su informe sobre el Gasto en Defensa y Seguridad (1998-2007), el sector defensa pasó de contar con el 4,8% del PIB en 2001 a un 5.1% en el año 2002 (Ministerio de Defensa Nacional [Mindefensa] 2009, pág 23), aumento significativo que se explica gracias al cambio de estrategia en defensa. Dicho aumento presupuestal permitió un crecimiento del 40% de efectivos en las Fuerzas Militares y cerca del 32% en la Policía Nacional, adicionalmente se crearon alrededor de 250 nuevas unidades militares entre las que se encuentran 60 batallones contraguerrilla, 15 brigadas móviles, ocho brigadas territoriales, 24 centros de instrucción y entrenamiento y 9 batallones de apoyo y servicio para el combate, así mismo la Policía Nacional logró crear 168 nuevas estaciones y 146 subestaciones, finalmente el aumento del poder militar se evidenció en el incremento de las capacidades de combate aéreo y la modernización de la inteligencia (Rangel y Medellín 2010, pág. 10), elementos que permitieron un mayor protagonismo de las Fuerzas Militares y de Policía.

El cambio en materia de seguridad generado tras la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia, puede ser entendido gracias a lo que Robert Jervis denomina Demandas Subjetivas de Seguridad, pues tal como establece el autor los tomadores de decisión pueden estar de acuerdo en cuanto a la situación objetiva de la amenaza, sin embargo existen divergencias en cuanto lo que están dispuestos a pagar por obtener un incremento en materia de seguridad (Jervis 1978, pág 174). Así pues el incremento en el presupuesto nacional dedicado al sector defensa, el aumento en el número de efectivos y unidades militares y adicionalmente la intensificación de acciones militares demuestra la divergencia existente entre uno y otro gobierno en referencia al costo de la seguridad.

La utilización de las Fuerzas Armadas como mecanismo fundamental para la consecución de la seguridad ciudadana y la protección de la democracia en el Estado colombiano hizo necesario el desarrollo de una estrategia militar para el combate contra las amenazas, por lo que se estructuró el Plan Patriota como la extensión militar del planteamiento político de la Política de Seguridad Democrática, dicha estrategia fue diseñada esencialmente para “atacar los centros estratégicos de las FARC en todo el país y muy particularmente en las regiones selváticas del suroriente” (Santos 2009, pág. 127).

Teniendo en cuenta la avanzada terrorista a lo largo del territorio colombiano y a las aspiraciones de las FARC sobre el departamento de Cundinamarca debido a su Plan Estratégico, se hizo necesaria la implementación de medidas que permitieran contrarrestar la amenaza en dicho territorio, para lo cual la V División del Ejército y la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) desarrollaron la Operación Libertad Uno en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima con el fin de neutralizar la amenaza terrorista en contra del centro del país especialmente de Bogotá (Florez 2012, pág. 75). Es así como la Operación Libertad se consolidó como la primera acción realizada tras la puesta en marcha del Plan Patriota y se convirtió en una de las maniobras más importantes en la búsqueda de la seguridad y estabilidad nacional, pues no solo garantizó la seguridad del centro del país, sino que adicionalmente desarticuló el despliegue estratégico de las FARC, quienes por más de quince años se dedicaron a implantar de manera paciente siete frentes para ir rodeando la capital de la República y así ejecutar sus planes estratégicos para la toma del poder por la vía armada (Rangel y Medellín 2010, pág. 15).

Quizá uno de los mayores logros durante la implementación del Plan Patriota fue la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, pues consolidó bajo un solo mando la actividad de las tres Fuerzas Militares (Fuerza Aérea, Ejército y Armada), situación que facilitó las operaciones en el territorio nacional y especialmente en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare en donde debían neutralizar los Bloques Sur y Oriental de las FARC. Teniendo en cuenta las características geográficas de la región, se hacía indispensable contar con operaciones conjuntas entre las tres Fuerzas Militares, pues los principales corredores viales de las FARC se ubican en los ríos, selvas y montañas y adicionalmente el espacio aéreo es uno de los puntos más vulnerables de dicha organización (Florez 2012, pág. 75).

Las múltiples operaciones y acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas se convirtieron en factores determinantes en el re establecimiento del orden estatal, a título de ejemplo se logró la “recuperación de la seguridad en las carreteras, en la medida en que la fuerza pública aseguró las vías de comunicación y se acabaron las pescas milagrosas de la guerrilla, la economía empezó a fluir de nuevo y el ambiente general mejoró” (Santos 2009, pág. 34).

Adicionalmente gracias a los esfuerzos realizados por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y en general por las Fuerzas Armadas, las FARC fueron perdiendo terreno lo que los llevó a abandonar su antiguo santuario y arrinconarse en zonas de frontera con el Brasil y Venezuela (Santos 2009, pág. 127). Sin lugar a dudas el desplazamiento de los actores

armados a zona de frontera fue un elemento que generó múltiples reacciones por parte de la comunidad internacional y específicamente de los Estados afectados por dicho fenómeno.

La reestructuración y fortalecimiento del aparato militar responden a la creencia de que el incremento en la fuerza militar siempre conduce a un incremento en la seguridad (Jervis 1978, pág. 185), sin embargo tal como establece Jeffrey Taliaferro la situación de anarquía del sistema internacional genera que algunos de los medios utilizados por un Estado para garantizar su seguridad termina generando una afectación en la seguridad de otros Estados (Taliaferro 2000 -2001, pág. 129), fenómeno que Robert Jervis denomina Dilema de Seguridad.

La Política de Defensa y Seguridad Democrática desarrollada durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Velez tuvo como objeto principal el control del territorio nacional para así recuperar el monopolio de las armas por parte del Estado y garantizar la seguridad de los ciudadanos, quienes eran los principales afectados por el accionar terrorista de los grupos armados al margen de la ley. Para el final de la primera administración de Uribe el incremento de la seguridad nacional era evidente, pues no solo se logró desarticular diferentes frentes de las FARC a través del desabastecimiento, aislamiento y descordinación producto de los planes ejecutados por el gobierno nacional y las fuerzas armadas, sino también se concretó la desmovilización de la mayoría de los frentes paramilitares que azotaban diferentes regiones del país. El éxito en materia de seguridad del periodo presidencial 2002-2006 resulta evidente al analizar las cifras, pues se “redujeron el número de homicidios en un 40%, el número de secuestros extorsivos en un 83%, el número de víctimas en homicidios colectivos en un 72%, los atentados terroristas en un 61% y los secuestros en retenes ilegales en un 99%” (Ministerio de Defensa Nacional [Mindefensa] 2006, pág. 10)

Sin embargo el Gobierno Nacional comprendió que no era suficiente el control territorial logrado durante el primer periodo presidencial, por lo cual a partir de 2006 se implementó la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, la cual buscó garantizar, a través del “trabajo coordinado de las FFMM y de Policía, que los habitantes de regiones que estuvieron por décadas sometidos a la violencia, recibieran los servicios públicos y sociales de las instituciones del Estado” (Santos 2009, pág. 57), pues los sectores en donde la presencia del Estado es escasa o nula son más proclives a albergar y desarrollar la cultura de la ilegalidad. Paralelamente el Ministerio de Defensa Nacional inició acciones concretas con el fin de localizar a los integrantes del Secretariado de las FARC, los

comandantes del Estado Mayor e igualmente a los comandantes de los diferentes frentes de dicha organización.

Una de las primeras acciones de Juan Manuel Santos como ministro de defensa fue la reestructuración de los servicios de inteligencia a través la desactivación de Cancerberos, un organismo en el que se reunían los directores de inteligencia de todas las agencias de seguridad del Estado, y la creación de Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas (JOEC) entidad mediante la cual las diferentes fuerzas armadas compartían información para dar con los objetivos de mayor rango dentro de las FARC (Pérez 2008, pág. 258). La reforma de los servicios de inteligencia permitió la creación de siete grupos élite que tenían por objeto realizar operaciones que permitieran dar con el paradero de cada uno de los miembros del secretariado de las FARC y así desestabilizar la organización guerrillera.

El segundo mandato de Álvaro Uribe (2006-2010) se consolidó como el periodo durante el cual se dieron los golpes más contundentes a la estructura militar de las FARC, pues gracias a la “inteligencia conjunta, capacidad de acción inmediata y decisión política garantizada por la participación y el liderazgo del ministro de Defensa” (Santos 2009, pág. 118), se logró ubicar, capturar y/o dar de baja a personajes clave dentro del aparato terrorista de las FARC.

Si bien es cierto que el Estado colombiano era consiente del desplazamiento del grupo guerrillero a zonas de frontera como consecuencia de la persecución que vivían desde el 2002, fue una sorpresa para las autoridades colombianas descubrir que los terroristas estaban siendo albergados y en algunos casos recibiendo colaboración en los Estados vecinos.

Desde los primeros años del Gobierno Uribe se tenían sospechas respecto a la presencia de terroristas dentro de territorio venezolano, por lo cual a través de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) el gobierno colombiano expuso a las autoridades venezolanas la presunta existencia de campamentos en territorio del vecino país, sin embargo no se recibieron respuestas por parte del gobierno venezolano (Semana 2010, párr. 14). Las relaciones con Venezuela se empezaron a tensionar desde 2004 debido al hallazgo de Rodrigo Granda dentro de territorio venezolano y a su posterior captura que suscitó controversia debido a que, según el gobierno venezolano, las autoridades colombianas violaron la soberanía de su país para ejecutar la captura, situación que fue desmentida por el gobierno colombiano.

Así pues tras el incidente con Rodrigo Granda el Estado colombiano acusó en múltiples ocasiones al gobierno venezolano de proteger y albergar terroristas, acusaciones que fueron comprobadas más adelante a través de diferentes hechos. A título de ejemplo tras

la captura de alias Martín Sombra se conoció que Jojoy y Reyes realizaron las gestiones pertinentes para que dicho guerrillero recibiera tratamiento médico en Venezuela y adicionalmente en el momento de la captura tenía en su poder un permiso para circular por el municipio de Machiquer, en el estado Zulia de Venezuela (Santos 2009, pág. 160).

Adicionalmente diversos pronunciamientos efectuados por el entonces presidente Hugo Chávez demostraron la relación de cercanía entre el grupo terrorista y el gobierno venezolano, pues tal como declaró ante la Asamblea Nacional de Venezuela "Las FARC No es un grupo terrorista, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano que aquí (en Venezuela) es respetado (El Clarín 2008, párr 2).

Teniendo en cuenta la condición de apoyo brindado a las FARC por Estados vecinos, el gobierno colombiano inició operaciones en zona de frontera para así evitar el empoderamiento de este grupo en territorios alejados. Las acciones emprendidas en territorios cercanos a las fronteras generaron reacciones por parte de los Estados vecinos, muestra de ello la inconformidad expresada por el gobierno ecuatoriano con respecto a las fumigaciones con glifosato en zona fronteriza, incluso se calificó este mecanismo de lucha contra el narcotráfico como un hecho hostil que generaba una grave perturbación a las relaciones bilaterales (Semana 2006, párr.2).

La inconformidad expresada por los Estados vecinos da cuenta de la percepción de inseguridad que tenían los mandatarios de dichos Estados respecto a las acciones colombianas, pues para entender la política internacional es necesario resaltar la importancia de los cálculos, metas y percepciones de los tomadores de decisión, pues terminan influyendo en la toma de decisión y la implementación de políticas (Jervis 1976, pág. 16).

Adicionalmente existen factores que Jeffrey Taliaferro denomina Modificadores Estructurales que permiten analizar la intensidad del dilema de seguridad; uno de ellos es la proximidad geográfica, pues las fronteras se consolidan como puntos vulnerables para la seguridad estatal, que en el caso de Perú, Venezuela y Brasil la amenaza provenía tanto de las Fuerzas Armadas colombianas como de los grupos irregulares que aprovechaban la frontera para delinquir.

El punto más agudo en las relaciones exteriores colombianas con sus vecinos se dio tras la Operación Fénix, la cual se consolidó como una de las acciones de mayor importancia en la lucha contra el terrorismo, pues permitió dar de baja a Raúl Reyes quien era uno de los máximos líderes de la organización. La información obtenida a través de inteligencia permitió establecer que el guerrillero utilizaba la frontera con Ecuador como un mecanismo

de escape de las autoridades colombianas, por lo que el gobierno colombiano en múltiples ocasiones informó al gobierno ecuatoriano sobre la presencia de campamentos de las FARC en la frontera norte sin embargo las autoridades del vecino país no efectuaban mayores acciones, situación que era aprovechada por las FARC para atacar a las fuerzas armadas colombianas desde territorio ecuatoriano (Santos 2009, pág. 186).

Debido a los múltiples intentos fallidos de capturar al jefe guerrillero, el gobierno colombiano decidió iniciar una operación comandada por la JOEC con el fin de neutralizar a Raul Reyes y desestabilizar el Bloque Sur de las FARC, así pues fue posible determinar la ubicación exacta del guerrillero y el 1 de marzo de 2008 dar de baja al segundo hombre más importante para la organización terrorista.

La operación se desarrolló desde territorio colombiano a través de aviones de la fuerza aérea que dispararon bombas de precisión sobre el campamento de Raul Reyes localizado en el municipio de Sucumbios (Ecuador) a 1800 metros de la frontera, no obstante hombres del ejército colombiano cruzaron la frontera con el fin de generar una cadena de custodia de todo el material probatorio encontrado en el campamento.

La incursión de las tropas colombianas dentro de territorio ecuatoriano generó duras críticas por parte de la región e incluso se llegó a un momento de crisis diplomática con Venezuela y Ecuador, pues dicha acción se considera como una violación a la soberanía estatal y por ende una falta contra el derecho internacional. Dicha crisis requirió la mediación Consejo Permanente de la OEA, en donde se determinó que Colombia había violado la soberanía ecuatoriana y por tanto se emitió una disculpa por parte del gobierno colombiano, sin embargo Estados Unidos manifestó “insatisfacción con el acuerdo final y a través de su Embajador Héctor Morales reafirmó su postura de que las naciones tienen derecho a la defensa propia” (Logan 2008, párr. 4).

La relación existente entre Estados Unidos y Colombia generó un ambiente de tensión en la región debido a las percepciones existentes en los regímenes de Estados vecinos, por lo cual la negociación emprendida por parte del gobierno colombiano y el gobierno norteamericano en lo referente a la utilización de siete bases militares colombianas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses desde 2009, despertó el descontento en la región y requirió de viajes oficiales por parte del entonces Presidente Álvaro Uribe para explicar el alcance del acuerdo.

Si bien es cierto que la seguridad estatal debe ser tratada por los entes gubernamentales de cada Estado, las acciones y políticas emprendidas para la consecución del orden nacional generan reacciones en la región y especialmente en los Estados vecinos,

pues tal como establece Robert Jervis se genera un Dilema de Seguridad, ya que “los medios utilizados por un Estado para aumentar su seguridad, genera un detrimento en la seguridad de otros” (Jervis 1978, pág.164). Dicha situación se evidencia en el caso colombiano, pues la Política de Seguridad Democrática se insaturó como un mecanismo para el re establecimiento del orden estatal mediante la consecución de la seguridad en el territorio, sin embargo las acciones emprendidas durante los años de aplicación de la política generaron críticas y rechazo por parte de la región y más específicamente los Estados vecinos, debido a la amenaza que representaba para la seguridad de otros Estados tal como ocurrió con la violación de soberanía a territorio ecuatoriano, a la movilización de actores armados regulares e irregulares a zona de frontera y a la percepción de empoderamiento generado por el aumento en capacidades militares y al alineamiento con Estados Unidos.

Si bien es cierto que los mecanismos de empoderamiento militar colombiano fueron utilizados como elemento de defensa contra la amenaza terrorista y no como factores ofensivos contra otros Estados, “las intenciones y motivaciones pueden cambiar a futuro y por ello los otros Estados se preparan para el peor escenario” (Jervis, 2015), por lo cual se hace necesario analizar y estudiar las respuestas generadas por Estados vecinos como Venezuela, Brasil y Perú al dilema de seguridad generado por Colombia.

2. VENEZUELA: RESPUESTAS A UN VECINO AMENAZANTE.

El Estado venezolano fue uno de los mayores afectados con el dilema de seguridad generado por Colombia tras la implementación de la Política de Seguridad Democrática, no solo por la proximidad geográfica entre ambos Estados sino también por factores elementales como las percepciones existentes entre los jefes de Estado y el proyecto político desarrollado en Venezuela.

Las dinámicas generadas por el dilema de seguridad permiten explicar las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, las cuales se caracterizaron por ser conflictivas y mantener situaciones de tensión constantes debido a las divergencias existentes en materia de seguridad. Así pues el Estado colombiano “puso de manifiesto su absoluta su absoluta intolerancia para cualquier grado de colaboración de un gobierno vecino con organizaciones subversivas nacionales, mientras Venezuela demostró su absoluta determinación en la defensa de su soberanía y del proceso político bolivariano” (Ramirez y Cadenas 2006, pág. 24).

Los mecanismos utilizados por Colombia para el aumento en su seguridad interna generaron reacciones por parte del Estado de Venezuela, el cual vio en dichas acciones no solo una amenaza a su integridad territorial sino también al aparato político e ideológico venezolano, por lo cual se hizo necesario que desde Caracas se gestaran instrumentos que permitieran la protección de los 2.219 km² de frontera.

Teniendo en cuenta la percepción de amenaza generada por Colombia en Venezuela, el presente capítulo está dedicado al estudio y análisis de los cambios en materia de seguridad generados en el Estado vecino a partir de la implementación de la Política de Seguridad Democrática en Colombia.

2.1 Percepciones de amenaza: Divergencias en materia de seguridad.

Para entender las respuestas de Venezuela ante los cambios en la política de seguridad nacional colombiana, es necesario comprender la realidad venezolana para dicho momento, pues tal como establece Robert Jervis existen diversos niveles de análisis que permiten entender el accionar estatal, uno de dichos niveles es el nivel doméstico, pues elementos como las variables sociales, políticas y económicas generan variaciones en la toma de decisiones en política exterior.

Una de las primeras acciones de Hugo Chávez tras su llegada a la presidencia fue el inicio de la militarización de la política venezolana con actos concretos como “la participación de ex militares en la política electoral, encargando a militares de la dirección de

PDVSA y otras entidades oficiales, permitiendo el voto de los uniformados, sacando a los soldados para reprimir o controlar manifestaciones y construyendo una política de rearme” (Sanin 2008, pág.63). Dichos hechos permitieron la fidelización de las fuerzas militares venezolanas con el proyecto político impulsado por el régimen chavista.

El periodo presidencial de Hugo Chávez no puede ser entendido sin el proyecto político adelantado por el ejecutivo venezolano, el cual se consolidó tras la promulgación de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Sin embargo la revolución bolivariana, como se denominó el proyecto chavista, no solo tuvo repercusiones a nivel interno sino que generó un gran impacto en la configuración política de la región latinoamericana, ya que buscó la consolidación de un modelo de izquierda que integrara a latinoamérica en un bloque político socialista y anti imperialista, para ello gestionó relaciones de cercanía y colaboración con los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Cristina Fernandez en Argentina y Fernando Lugo en Paraguay

El discurso de izquierda del gobierno chavista se contrapuso al proyecto adelantado por el ejecutivo colombiano a través de la Política de Seguridad Democrática, pues el programa uribista fue un proyecto de derecha que alineó al país con la “doctrina de seguridad de los Estados Unidos, país que es encarnación de los valores de derecha por su defensa a ultranza del capitalismo liberal” (Márquez 2008, pág.194)

El aumento en el presupuesto de defensa y en general de las capacidades militares del Estado colombiano generó un clima de desconfianza en el ejecutivo venezolano, pues tal como establece Jeffrey Taliaferro “la condición de anarquía internacional produce incertidumbre y los Estados no tienen certeza de las intenciones presentes o futuras o a la distribución de capacidades de otros Estados” (Taliaferro 2000 -2001, pág. 136), así pues las herramientas empleadas para la defensa de la nación podrían convertirse en cierto momento en elementos utilizados para la ofensiva en contra de Venezuela.

Adicionalmente la incertidumbre y desconfianza por parte del gobierno venezolano estaba alimentada por el alineamiento existente entre Colombia y Estados Unidos en materia antiterrorista desde 2001, pues el proyecto ideológico y político de Venezuela tenía como principal adversario al Estado norteamericano; según Taliaferro el incremento de las capacidades militares y las alianzas pueden cambiar las creencias sobre un Estado, convenciéndolo que es más peligroso de lo que pensaba. (Taliaferro 2000 -2001, pág. 136)

Aún así las relaciones colombo venezolanas se mantuvieron estables hasta el 2004, pues hasta dicho momento el ejecutivo colombiano tenía simples sospechas respecto a la

presencia de guerrilleros de las FARC en territorio venezolano, por lo cual se trató el tema a través de los delegados de ambas naciones ante Combifron.

Sin embargo el punto de quiebre de las relaciones entre ambos Estados se generó en 2004 tras la captura de Rodrigo Granda por parte de las autoridades colombianas, presuntamente en territorio venezolano. Según versiones emitidas por el presidente Hugo Chávez, oficiales de la Policía de Colombia violaron la soberanía venezolana y sobornaron a oficiales del vecino país para lograr el secuestro de Granda en territorio venezolano (Chávez 2006, pág. 141). Por su parte su homólogo colombiano afirmó que la captura de Granda se había realizado en Cúcuta como resultado de la política de recompensas ejecutada por el gobierno colombiano.

A pesar de no tener certeza respecto a la operación en contra de Rodrigo Granda, el gobierno venezolano aseguró que las autoridades colombianas habían transgredido el derecho internacional al violar la soberanía venezolana, así pues Colombia se materializó como una amenaza a la integridad del territorio venezolano y por tanto aumentó la percepción de inseguridad y desconfianza por parte del ejecutivo del vecino país.

El alineamiento político e ideológico gestionado por el Presidente venezolano en la región consolidó el llamado Socialismo del Siglo XXI, modelo en el cual se inscribieron gobiernos como el ecuatoriano, venezolano y boliviano; por lo cual se generó una relación de respaldo y apoyo entre los mandatarios de dichos Estados.

La cercanía entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador, se hizo evidente tras el desarrollo de la Operación Fénix en 2008, ejercicio militar mediante el cual se dio de baja a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, pues la violación de soberanía por parte de Colombia a territorio ecuatoriano, generó respuestas contundentes por parte del ejecutivo venezolano, incluso se llegó al punto más álgido de las relaciones entre los dos Estados.

Pese a que la operación se realizó desde territorio colombiano, la incursión de tropas colombianas a territorio ecuatoriano con el fin de recoger el material probatorio y generar una cadena de custodia, fue considerado como una clara provocación y una violación al derecho internacional.

Tal como considera Jeffrey Taliaferro “algunos Estados solamente desarrollan estrategias encaminadas a la búsqueda de seguridad, sin embargo generan espirales de conflicto y hostilidad inadvertidamente” (Taliaferro 2000 -2001, pág. 129), supuesto que explica la situación colombiana respecto a su lucha contra los grupos armados ilegales.

Tras la Operación Fénix el gobierno venezolano aumentó la percepción de inseguridad frente a Colombia, pues contrario a lo ocurrido con el caso Granda, la muerte de

Raul Reyes demostró que las Fuerzas Armadas colombianas encabezadas por el ejecutivo harían lo que fuera con tal de acabar con los grupos armados ilegales, incluso si era necesario atentar en contra de la integridad de los Estados vecinos.

Para el Estado venezolano la preocupación fue mucho mayor pues son 2219km² de frontera con un actor amenazante como Colombia situación que aumenta el dilema de seguridad según Taliaferro, ya que la proximidad geográfica se constituye como un modificador estructural que genera un mayor impacto en el dilema de seguridad generado por un Estado.

En septiembre del mismo año se llevó a cabo la Operación Alfil, ejercicio militar que tenía por objeto la captura de John 40 (uno de los encargados del negocio del narcotráfico de las FARC), pese a que no se logró la captura del integrante de las FARC, se lograron incautar 3 computadores en los que se encontró información valiosa respecto al financiamiento de la organización, sin embargo el hallazgo más importante fueron unos lanzacohetes AT-4 que habían sido vendidos por la empresa Saab Bofors al Estado venezolano.

Ante las acusaciones presentadas por el ejecutivo colombiano y los consiguientes reclamos, el gobierno venezolano aseguró que era una nueva arremetida en contra de Venezuela, fundamentada en mentiras (La Silla Vacía 2009, párr. 19). Fuese real o no la información suministrada respecto al arsenal encontrado en el campamento guerrillero, el Estado venezolano asumía las declaraciones del ejecutivo colombiano como una amenaza para su seguridad debido a las acciones efectuadas por las Fuerzas Armadas durante el caso Granda y la Operación Fénix.

Robert Jervis plantea que cuando “un Estado está predisposto a ver a otro Estado como un adversario o una amenaza, tiende a reaccionar más fuerte y rápido en contra de ese Estado” (Jervis 1978, pág. 175). Venezuela al tener la predisposición frente a Colombia debido a los antecedentes de violación de soberanía, respondía fuertemente a las acusaciones colombianas, por lo cual se congelaron las relaciones y se llamó a consultas a los embajadores en múltiples ocasiones. Para Venezuela cualquier acusación proveniente de Colombia podría considerarse como una excusa para resquebrajar y atentar contra la estabilidad territorial y política del país.

Por los anteriores acontecimientos se evidencia que las relaciones colombo venezolanas estuvieron marcada por la incertidumbre y desconfianza generada por la búsqueda de seguridad nacional de cada uno de los Estados, sin embargo es imposible comprender las dinámicas entre Colombia y Venezuela sin tener en cuenta el alineamiento de

Colombia con Estados Unidos, que sin lugar a dudas terminó generando un ambiente de recelo entre los dos Estados suramericanos.

Para Jeffrey Taliaferro el desarrollo de alianzas “pueden cambiar las creencias sobre un Estado, convencándolo que es más peligroso de lo que pensaba” (Taliaferro 2000 -2001, pág. 136), por lo cual el Estado venezolano expresó su rechazo total a la firma del acuerdo militar colombo- estadounidense, el cual “contemplaba la presencia de personal uniformado estadounidense en siete bases militares de Colombia” (Semana 2010, párr. 2).

Pese a que el acuerdo militar hacía parte de la estrategia colombiana en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y por tanto tenía implicaciones exclusivamente a nivel interno, el gobierno de Venezuela afirmó que este acuerdo afectaba profundamente la seguridad del Estado venezolano.

Para el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, Estados Unidos se consolidaba como una amenaza para la soberanía territorial y política, muestra de ello las afirmaciones del mandatario en las que aseguraba que el eje del mal era Washington, y que con sus aliados en el mundo amenazaban e invadían (Romero 2006, pág. 3), desde Venezuela se planteó el escenario de una invasión norteamericana en su territorio y por ello las alarmas frente a las bases militares en territorio vecino se prendieron.

El régimen chavista tenía claro que tener a Estados Unidos dentro de territorio suramericano, a través de sus fuerzas militares, era una amenaza latente contra la estructura política de Venezuela, pues durante el golpe de Estado de 2002 se comprobó la amenaza norteamericana ya que las autoridades venezolanas confirmaron que dos jefes militares estadounidenses, el teniente coronel James Rodgers y el coronel Ronald McCammon, secundaron y asesoraron a los generales alzados contra Chávez (Fernandez 2004, párr.31).

Así pues en este escenario de desconfianza, incertidumbre y hostilidad, el Gobierno venezolano tuvo la necesidad de generar mecanismos de defensa que permitieran hacer frente al dilema de seguridad generado por Colombia tras la implementación de la Política de Seguridad Democrática, por lo cual se hace necesario realizar un análisis respecto a los cambios en las estrategias de seguridad del vecino país.

2.2 Política de seguridad venezolana: estrategias para la defensa de la integridad estatal.

Teniendo en cuenta la anarquía del sistema internacional y la consiguiente necesidad de self help, el Estado venezolano implementó medidas en materia de seguridad para contener la amenaza proveniente de Colombia y auspiciada por Estados Unidos, pues teniendo en cuenta

las percepciones del gobierno venezolano, dichos Estados eran actores desestabilizadores para el orden y soberanía venezolana.

El proyecto bolivariano emprendido por Chávez desde su llegada al poder no puede ser entendido sin el papel de las fuerzas armadas, ya que desde 1999 se emprendió un proyecto de empoderamiento de la Fuerza Armada Nacional no solo en el ámbito militar sino también político mediante la participación de ex militares en la política electoral, permitiendo el voto de los uniformados y sacando a la calle a los soldados a reprimir o controlar las manifestaciones (Sanin 2008, pág.63).

La alianza generada entre el ejecutivo y las fuerzas militares de Venezuela se entiende gracias a la necesidad del régimen chavista de consolidar su proyecto político, así pues se inició un proceso de fortalecimiento de las relaciones cívico militares a través del denominado Plan Bolívar 2000, el cual tenía por objeto el acercamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la población civil a través de la prestación de servicios sociales por parte de los militares nacionales, a título de ejemplo se implementaron jornadas de repartición de alimentos y medicamentos en sectores deprimidos de la nación e igualmente se prestaron servicios de salud y nutrición.

Así pues entre 1999 y 2002 se realizó un empoderamiento cívico- político de las fuerzas armadas venezolana, sin embargo tras el inicio de la Política de Seguridad Democrática en Colombia, es posible rastrear cambios en materia de seguridad nacional en el Estado venezolano.

Tal como se estableció en el numeral anterior del presente capítulo, las relaciones entre Colombia y Venezuela hasta 2004 se mantuvieron estables y no se presentó algún evento que irrumpiera trascendentalmente en las relaciones bilaterales, sin embargo tras la captura de Rodrigo Granda se resquebrajó la estabilidad y confianza entre ambos Estados, por lo cual es posible evidenciar un cambio significativo en capacidades y estrategia militar.

Desde 2005 se evidencia un aumento en las capacidades venezolanas en el sector defensa, situación que se evidencia en el gasto militar registrado por dicho país que, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pasó de 1449 millones de dólares en 2004 a 2054 millones de dólares en 2005 (Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI] 2015, pág. 6).

El aumento en el gasto militar corresponde a la adopción de una nueva doctrina militar denominada Defensa Integral de la Nación, en la cual se abordaron temas como “conflicto de cuarta generación, guerra asimétrica y guerra de resistencia” (Hernandez 2009,pág.6). Tal como lo ordena la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (2005) en el

artículo 3, la Fuerza Armada Nacional debe “resistir ante la ocupación del país por fuerzas militares invasoras incluyendo acciones de prevención frente a fuerzas hostiles que muestren esa intención” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2005, art.3).

Para asegurar la defensa de las fronteras y resistir la ocupación de un agente externo, el gobierno venezolano en abril de 2005 creó la Guardia Territorial que en conjunto con la población civil, tenía la responsabilidad de proteger al Estado ante un ataque asimétrico.

Tal como estableció el General Melvin López Hidalgo (secretario del Consejo de Defensa de la Nación) en 2005 “la FANB estaba cambiando su doctrina militar ante la amenaza permanente [...] El cambio de doctrina incluye la preparación de los reservistas y de la población civil para el desarrollo de una eventual Guerra Asimétrica” (Garrido 2005,pág.13).

Para Jeffrey Taliaferro el Dilema de Seguridad induce a los Estados a tomar medidas que permitan aumentar su seguridad y así mitigar los efectos generados por la búsqueda de seguridad de los otros, así pues Venezuela trazó 3 líneas estratégicas para regir la nueva etapa de confrontación con el bloque Colombia- Estados Unidos, a saber: “1. Repotenciar la FANB; 2. Reforzar la unión cívico – militar; 3. Organizar el pueblo para la defensa territorial” (Garrido 2006, pág.21).

El reforzamiento en materia de seguridad por parte del Estado venezolano, generó la necesidad de iniciar un proceso de reforma y modernización del material bélico de la nación, así pues se estima que tan solo en el 2006 se gastaron cerca de 632 millones de dólares en la compra de armamento especialmente de procedencia rusa (Colgan 2011, pág.8).

Jeffrey Taliaferro explica que los Estados que tienen fronteras debiles o poseen vecinos poderosos, tienen incentivos para desarrollar doctrinas militares ofensivas y para mantener un incremento en las capacidades de las fuerzas armadas (Taliaferro 2000 -2001, pág. 140), es por ello que Venezuela incrementó notablemente el pie de fuerza militar a través de la incorporación de nuevos cuerpos militares como la Guardia Territorial y la preparación de reservistas, igualmente la compra de armamento a Estados como China y Rusia estimado en 2711 entre el 2007 y el 2008 (Colgan 2011, pág.8).

El aumento de las capacidades venezolanas se explica gracias a los escenarios de guerra que postuló el ejecutivo venezolano, en los cuales se evidencia la percepción de inseguridad proveniente de Colombia. Así pues se planteó un primer escenario de confrontación directa con Colombia y un segundo escenario establece una guerra asimétrica en donde Colombia sirve de apoyo a Estados Unidos, Estado que busca la desestabilización del régimen chavista para intervenir territorio venezolano.

La constante percepción de amenaza del régimen chavista hacia el alineamiento colombo-estadounidense, generó que episodios como el anuncio de la utilización de bases militares colombianas por parte de uniformados estadounidenses, incrementara los rechazos por parte del gobierno venezolano.

Tras la operación Fenix y la consiguiente violación de soberanía por parte de Colombia a territorio ecuatoriano, el ejecutivo de Venezuela ordenó la movilización de 10 batallones a la zona de frontera y amenazó con enviar unos Sukoy en caso de ofensiva por parte del Estado colombiano.

Para finales del 2009 Venezuela contaba con submarinos, corbetas, aviones supersónicos, helicópteros y diferentes tipos de armas que serían empleadas en caso de concretarse una amenaza proveniente del Estado colombiano. Aunque no se evidenció una clara violación y/o alteración al orden venezolano, las percepciones generadas a raíz de acciones como el incremento de capacidades militares de Colombia, la captura de Rodrigo Granda, la Operación Fénix y evidentemente el alineamiento colombo estadounidense, impulsaron el desarrollo de planes y políticas por parte del Estado venezolano para así contener la amenaza colombiana.

3. BRASIL: ENTRE LA COOPERACIÓN Y LA AMENAZA

Para Robert Jervis aunque exista una situación objetiva, los actores difieren en sus respuestas debido a los precios que están dispuestos a pagar para obtener seguridad (Jervis 1978, pág.174), así pues se hace necesario analizar las acciones emprendidas por Brasil para hacer frente al Dilema de Seguridad generado por Colombia, pues a pesar de ver comprometida su seguridad como en el caso venezolano, reaccionó de manera menos bélica y por el contrario buscó generar una agenda bilateral para la lucha contra la ilegalidad en zona de frontera.

Las respuestas generadas por Brasil no pueden entenderse sin el proyecto brasilero de liderazgo regional, pues tal como se analizará a lo largo del presente capítulo, fueron múltiples las ocasiones que utilizó su papel de líder para mediar entre Colombia y otros actores regionales tras el acontecimiento de eventos que exacerbaban el dilema de seguridad.

Igualmente las respuestas de Brasil ante el Dilema de Seguridad generado por Colombia se pueden entender gracias a las características de los cerca de 1645 km² de frontera, pues es una zona principalmente selvática y con rutas fluviales de gran importancia, es por ello que se consolida como una frontera porosa que requiere de esfuerzos bilaterales para evitar que la ilegalidad aproveche las condiciones geográficas de la zona para ejercer actividades delictivas.

3.1 Coincidencias y divergencias en el tratamiento a la ilegalidad.

El inicio de la Política de Seguridad Democrática en Colombia coincide con la llegada al poder de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, quien a lo largo de su mandato insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad brasilera para así lograr la proyección internacional del Estado.

Si bien es cierto que las relaciones de cooperación en materia de seguridad fronteriza entre Colombia y Brasil datan de la presidencia de Andrés Pastrana, desde 2003 se incrementó la cooperación militar y policial para vigilar la frontera y compartir información (Pastrana E. 2011, pág.8).

Para Brasil el desarrollo de mecanismos que permitieran lograr mayor seguridad en su territorio y en las zonas de frontera era una cuestión vital, pues el proyecto brasilero de liderazgo regional requiere estabilidad nacional, para ello reforzó las relaciones con Colombia y así evitar un efecto derrame del conflicto en su territorio.

Tras las ofensivas militares iniciadas en Colombia en contra de los grupos armados al margen de la ley, se incrementó la presencia de dichas organizaciones en zona de frontera

desde donde se desarrollaban actividades ilícitas. La frontera con Brasil se consolidó como un territorio estratégico para las FARC debido a sus características geográficas por lo cual en múltiples ocasiones se encontraron campamentos de la organización criminal en territorio brasilero (El Espectador 2010).

Para Robert Jervis los jefes de Estado tienden a creer que los Estados amenazantes pueden ser contenidos mediante el mantenimiento de lazos fuertes con ellos (Jervis1992, pág.), supuesto que permite analizar el accionar brasilero frente a la amenaza colombiana, pues a pesar del Dilema de Seguridad, fueron organizados mecanismos de carácter bilateral para el fortalecimiento de la seguridad en zona de frontera.

A título de ejemplo tras la reunión presidencial del 7 de marzo de 2003 en Brasilia, los mandatarios de ambos Estados acordaron la creación de

“un Grupo de Trabajo, para ser integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia de los dos países, con el objetivo de promover la cooperación e intercambio de informaciones para la efectiva prevención y represión de la criminalidad y del terrorismo, inclusive en el ámbito de los Acuerdos bilaterales vigentes de extradición y cooperación judicial en materia penal” (Presidencia de la República [DAPRE] 2003, párr. 10)

Dicho grupo de trabajo se consolidó como el primer mecanismo emprendido durante la administración de ambos mandatarios para consolidar la seguridad en la región fronteriza, sin embargo no fue la única respuesta bilateral a la criminalidad, pues a lo largo del mandato de Lula Da Silva y de Uribe Velez fueron múltiples los esfuerzos para generar relaciones de cordialidad y así disminuir la desconfianza existente entre ambos Estados.

Desde el 2005 se inició un proceso de operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas brasileras y colombianas con el fin de ejercer control territorial en zona de frontera, así pues se destaca la Operación Colbra 1 ejecutada desde 2005 para combatir de manera efectiva los vuelos ilícitos, para lograr el objetivo se utilizó tecnología que permitió el rastreo e interceptación de vuelos irregulares y el respectivo intercambio de información entre las Fuerzas Aéreas de ambos Estados (Oficina de Prensa Fuerza Aérea Colombiana 2005). La iniciativa Colbra requirió de dos fases más en 2007 y 2009 para perfeccionar la coordinación y cooperación de acciones.

El apoyo de Brasil a las autoridades colombianas especialmente en la lucha contra el narcotráfico se evidenció tras la captura de Juan Carlos Ramirez Abadía alias chupeta, quien fue capturado en Sao Paulo el 7 de agosto de 2007. Igualmente se generaron pronunciamientos por parte de autoridades brasileras reiterando el apoyo a la seguridad colombiana, a título de ejemplo el Ministro de Defensa en una reunión bilateral efectuada el 11 de marzo de 2009 aseguró que los guerrilleros que intentaran entrar en Brasil, serían

recibidos a bala y destacó la importancia de controles fronterizos terrestres y la necesidad de ampliarlos a espacio aéreo y fluvial (Ramirez 2009, pág.100).

Con el fin de aumentar la seguridad aérea Brasil se convirtió en uno de los mayores proveedores de la Fuerza Aérea Colombiana, muestra de ello las compras colombianas a la Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), entre las que se destacan los Super Tucano A-29 y T-27. (Ramirez 2009, pág.99)

Los mandatarios de ambos Estados se reunieron en 15 oportunidades entre 2002 y 2009 y manifestaron la voluntad de generar una relación especial entre ambos Estados (Ramirez 2009, pág.97), situación que puede ser entendida gracias a Robert Jervis pues para él los altos niveles de comunicación y los encuentros frecuentes entre líderes nacionales incrementa la transparencia y dificulta que una de las partes incumpla los acuerdos con el otro (Jervis 1992, pág.721). Así pues los acercamientos entre Brasil y Colombia se pueden explicar como un mecanismo utilizado por el gobierno brasileiro para contener la amenaza colombiana.

A pesar de la cooperación bilateral las relaciones entre ambos países estuvieron marcadas por la desconfianza y la divergencia en temas sensibles para Colombia en materia de seguridad, pues algunos de los mecanismos utilizados por el país andino para garantizar su seguridad eran vistos como elementos desestabilizadores y amenazantes para Brasil (Dilema de Seguridad).

Uno de los primeros puntos divergentes entre los dos Estados es el Plan Colombia, pues para Colombia se consolidó como una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y posteriormente contra el terrorismo, sin embargo para Brasil era un plan amenazante pues “implicaba un riesgo de internacionalización de la amazonía” (Ramirez 2009, pág. 94). La internacionalización de la amazonia representó una amenaza directa en contra de Brasil, ya que para el Estado es una zona estratégica y vital con la que puede ejercer poder debido a la riqueza de recursos naturales que posee (Herrera 2011, pág.4).

Un segundo punto que distanció a los gobiernos de Brasil y Colombia fue el tratamiento dado al conflicto colombiano, pues para Brasil se debía generar una salida negociada contrario a la estrategia militar formulada en la Política de Seguridad Democrática. Este punto se relaciona con la negativa del gobierno Lula de calificar a las FARC como una organización terrorista, situación que generó molestias en Colombia.

Quizá uno de los puntos que generó mayor desconfianza en el Gobierno brasileiro fue el alineamiento entre Colombia y Estados Unidos, pues tal como afirma Taliaferro “las alianzas pueden cambiar las creencias sobre las intenciones de un Estado convenciendo al

adversario de que es más peligroso de lo que se pensaba anteriormente” (Taliaferro 2000 - 2001, pág.136).

Uno de los eventos que mayor rechazo generó fue la incursión colombiana en territorio ecuatoriano durante la Operación Fénix, pues se demostró la capacidad militar colombiana y al mismo tiempo se desafió el derecho internacional a través de la violación de soberanía. El Gobierno brasilero cuestionó la actuación colombiana pero utilizó la situación para reforzar su papel como líder regional mediante la mediación entre Colombia, Ecuador y Venezuela e igualmente generó respuestas de alcance regional para evitar que se repitieran dichos actos, tales respuestas se analizarán en el siguiente apartado del presente capítulo.

El Plan Colombia auspiciado por Estados Unidos era visto con recelo por diversos sectores brasileros, pues “sospechaban de una militarización de la región andina y amazónica a través de Colombia” (Spies 2014, pág.52), situación que afectaría el área de influencia natural de Brasil y por tanto sería un obstaculo para el desarrollo del proyecto de liderazgo regional del Estado.

La desconfianza respecto al alineamiento entre Colombia y Estados Unidos fue evidente tras el anuncio de la utilización de bases militares colombianas por parte de uniformados estadounidenses en 2009, pues desde Brasil se “temía que las bases fueran utilizadas para la vigilancia amazónica por parte de los norteamericanos” (Spies 2014, pág.52). Por ello el acuerdo fue criticado por el mandatario brasilero, sin embargo afirmó ser respetuoso con la soberanía colombiana y pidió al mandatario colombiano ser transparente respecto el acuerdo y que este no traspasara las fronteras colombianas (Semana 2009).

Así pues tal como establece Robert Jervis el hecho que “dos actores tengan las mismas percepciones no garantiza que van a adoptar las mismas respuestas” (Jervis 1976, pág.31), situación que se evidencia al comparar las reacciones brasileras y venezolanas frente al Dilema de Seguridad generado por Colombia, pues a pesar de tener la percepción de inseguridad y amenaza, las respuestas emprendidas por ambos Estados fueron diferentes en gran parte por las divergencias en la estructura social, económica y en las políticas domésticas que afectan la toma de deicisión de los mandatarios (Jervis 1976, pág.21).

Finalmente se hace necesario analizar los cambios generados en la estrategia de seguridad nacional de Brasil debido a la amenaza colombiana tras la implementación de la Política de Seguridad Democrática.

3.2 Respuestas de un líder regional

A pesar de haber desarrollado mecanismos de diálogo y cooperación, Brasil implementó mecanismos de fortalecimiento de sus sistemas de defensa y seguridad para así enfrentar el Dilema de Seguridad generado por Colombia.

Tal como afirma Jeffrey Taliaferro la anarquía induce a los Estados a asumir posturas de Self Help para así aumentar su seguridad y mitigar los efectos causados por las políticas de seguridad de los otros (Taliaferro 2000 -2001, pág.136), así pues a continuación se analizarán los mecanismos utilizados por Brasil para aumentar su seguridad y contener la amenaza colombiana

Para Luiz Inacio Lula da Silva la seguridad fue un factor clave para el desarrollo de su plan de gobierno, así pues se iniciaron procesos de re estructuración en el sector defensa para garantizar la estabilidad brasilera y hacer frente a amenazas internas y externas, así pues en 2004 se evidencia un aumento sustancial en el gasto militar del país, pasando de 8394 millones de dólares en 2003 a 9781 millones de dólares en 2004 (Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI] 2015, pág. 6). Dicho aumento presupuestal se explica gracias a la implementación de mecanismos como el Departamento de Fuerza Nacional de Seguridad Pública, creado en 2004 y al fortalecimiento y al “programa de modernización de sus fuerzas armadas que incluyó la compra de submarinos, helicópteros y adquisición de tecnología” (Lissardy 2011, párr. 20)

Tal como analiza Lissardy, la tasa anual de crecimiento a partir de 2004 fue de 6,9%, situación que permitió al Estado brasilero no solo aumentar los acuerdos militares con Estados como Francia, Rusia, Alemania e Italia, sino que también le permitió incrementar su capacidad militar no solo en el desarrollo de armamento, sino también de tecnologías de gran importancia para el sector defensa.

Sin embargo los cambios más significativos se desarrollaron durante el segundo mandato de Luiz Inacio Lula Da Silva, pues se evidenció un fortalecimiento en la institucionalidad nacional en lo referente al sector defensa e igualmente se promovieron acciones de vital importancia para Brasil no solo en el mantenimiento de sus seguridad sino en su proyecto de liderazgo regional.

El 6 de septiembre de 2007 se instauró un Comité Ministerial con el fin de formular una Estrategia Nacional de Defensa (END) que le permitiera al Estado estar preparado para defenderse no solo de las agresiones sino también de las amenazas, pues “se vive en un mundo en donde la intimidación tripudia sobre la buena fe” (Ministerio de Defensa de Brasil

2008, pág.8), adicionalmente se dio la creación del Sistema Nacional de Movilización, el cual debía actuar en caso de amenaza o agresión extranjera en territorio brasilero, así pues se evidencia la preocupación por una posible intervención y desestabilización de territorio por parte de un agente externo.

El hecho de que el Estado brasilero impulsara un fortalecimiento en su estructura de defensa y seguridad responde a una de las consecuencias del Dilema de Seguridad expuestas por Jeffrey Taliaferro, pues para él

“los Estados que carecen de fronteras defendibles o que tienen vecinos fuertes tienen mayores incentivos para desarrollar instituciones centrales fuertes, fuerzas armadas de mayor capacidad y adoptar doctrinas militares ofensivas” (Taliaferro 2000 -2001, pág.140)

Sin lugar a dudas la acción militar colombiana que generó mayor preocupación en la región fue la Operación Fénix y Brasil al ser vecino y compartir una frontera de difícil control, generó mecanismos que permitieran mantener la soberanía del Estado, así pues es posible evidenciar respuestas de tipo interno y otras de tipo regional.

La preocupación brasilera respecto a dicho evento se evidencia en la END, pues se establece que es necesario “disuadir la concentración de fuerzas hostiles en las fronteras terrestres, en los límites de las aguas jurisdiccionales brasileñas e impedirles el uso del espacio aéreo nacional” (Ministerio de Defensa de Brasil 2008, pág.11). Para conseguir dicho objetivo se planteó la Hipótesis de Empleo, la cual es una “visión anticipada de posible empleo de las Fuerzas Armadas en determinada situación o área de interés estratégico para la defensa nacional” (Ministerio de Defensa de Brasil 2008, pág.46)

Uno de los puntos más importantes de la END es la necesidad de generar trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Escuela superior de guerra, ya que así se permitiría la formulación de líneas de respuesta y actuación, igualmente se plantea la urgencia de aumentar la presencia militar en la región amazónica y el Atlántico sur por ser puntos vulnerables de la geografía brasilera.

Sin embargo la re estructuración militar brasilera no se concentró exclusivamente en el pie de fuerza militar, pues se desarrollaron mecanismos tecnológicos y científicos en una asociación entre la inversión pública y privada con el fin de tener la capacidad de disuadir y sorprender. Para lograr dicho objetivo el Ministerio de Defensa brasilero desarrolló el Programa Nacional de Actividades Espaciales, a partir del cual se implementarían satélites de monitoreo ambiental y científico, satélites geostacionarios de comunicaciones y meteorología, sensores ópticos y radares (Ministerio de Defensa de Brasil 2008, pág. 46)

Adicionalmente se estableció la Política de Desarrollo Productivo (PDP), la cual es una iniciativa formulada por el Ministerio de Defensa en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y tiene por objeto “recuperar e incentivar el crecimiento de la base industrial instalada, ampliando el suministro para las Fuerzas Armadas brasileñas y exportaciones” (Ministerio de Defensa de Brasil 2008, pág.54), dicha política permitiría la autosuficiencia del Estado y adicionalmente la captación de mercados suramericanos, incluido Colombia.

El dilema de seguridad generado por Colombia llevó a Brasil a contemplar la posibilidad de implementar mecanismos de tipo regional que permitieran mantener la estabilidad y soberanía de los Estados de la región, así pues el 24 de febrero de 2008 el Presidente brasileño y el Ministro de Defensa lanzaron oficialmente la idea de crear un Consejo Suramericano de Defensa, sin embargo la idea brasileña empezó a ganar peso tras lo ocurrido durante la operación fénix, por lo cual el Ministro de Defensa emprendió una gira regional en busca de apoyo (Moreira 2008, pág.7-8)

La propuesta de creación del Consejo Suramericano de Defensa (CSD) por parte de Brasil puede ser entendido gracias al concepto de Balanza de Poder formulado por Robert Jervis, ya que el aumento del poder de un Estado, si se convierte lo suficientemente fuerte para amenazar a otros, va a generar una coalición que permita contrarrestar la amenaza (Jervis 1992, pág. 717). Así pues el dilema de seguridad ocasionado por Colombia generó la necesidad de contar con un mecanismo interestatal que permitiera la vigilancia y control de la soberanía en la región.

El papel de líder regional en el que ha venido trabajando Brasil durante los últimos años permitió que generara una gran coalición que bloqueara a un Estado con una actitud agresiva y amenazante para la región (Jervis 1992, pág. 719), así pues el CSD defendería como principios generales: la consolidación de la democracia y la paz, la no intervención en asuntos internos, el respeto a la soberanía de los países de la subregión y la integridad territorial (Saint-Pierre 2008, pág.78).

De igual manera Brasil se opuso en múltiples ocasiones a la ingerencia de Estados Unidos en asuntos suramericanos, por lo que al hacerse efectivo el anuncio de la utilización de bases militares colombianas por parte de efectivos estadounidenses, el ejecutivo brasileño lanzó su voz de rechazo y estableció que el acuerdo “podría transformar al país suramericano en un reducto de operaciones para Estados Unidos” (Peixoto 2009, párr.5)

Sin embargo la respuesta de Brasil frente al acuerdo colombo- estadounidense referente a las bases se enfocó en el diálogo con el Gobierno colombiano, muestra de ello la

reunión presidencial en donde Lula solicitó a Uribe transparencia en sus negociaciones con Estados Unidos e igualmente pidió garantías para que las operaciones militares estadounidenses se limitaran exclusivamente a territorio colombiano (La república 2009, párr. 3). Igualmente el presidente brasilero rectificó su respeto por Colombia y su soberanía, por lo que declaró : “La soberanía es intocable y a mí no me agrada nada una base estadounidense en la región, pero así como no quiero que Uribe se entrometa en mi Gobierno” (El tiempo 2009, párr. 3). Dicha postura se contrapone a la actitud venezolana y demuestra una vez más que en política internacional a pesar de existir una situación objetiva, los tomadores de decisión divergen en sus respuestas (Jervis 1978, pág.174)

Finalmente es posible establecer que Brasil durante el mandato de Lula Da Silva dio prioridad a los temas de seguridad debido al contexto regional y al proyecto de liderazgo del país, por lo cual se hizo necesario una re estructuración del sistema de defensa e igualmente la implementación de medidas tanto nacionales como de carácter regional para hacer frente al Dilema de Seguridad generado por Colombia.

4. PERÚ: EL ALIADO REGIONAL

Perú representa un caso excepcional en la región respecto a sus relaciones con Colombia y especialmente a la postura tomada respecto al conflicto colombiano, así pues el presente capítulo analizará las respuestas dadas por Perú frente al dilema de seguridad ocasionado por dicho Estado tras la implementación de la Política de Seguridad Democrática.

Los 1626 km² de frontera que comparten las dos naciones se han convertido en puntos clave para el accionar delictivo debido a la ausencia de presencia estatal y adicionalmente a la geografía de la región, pues la condición selvática y las múltiples vías fluviales son elementos fundamentales para que los grupos criminales ejerzan su acción delictiva.

Así pues, tal como establece Robert Jervis la diferencia de decisiones tomadas por los Jefes de Gobierno se pueden entender gracias a las “variaciones en las estructuras sociales, económicas y las políticas domésticas a las que se enfrentan” (Jervis 1976, pág. 21), dicho supuesto permitirá comprender las reacciones peruanas respecto a la situación generada por Colombia, para ello a lo largo del presente capítulo será necesario abordar las medidas tomadas en las administraciones de Alejandro Toledo y Alan García.

4.1 Lucha contra la ilegalidad: punto clave en la cooperación bilateral.

Entre los casos estudiados durante la presente monografía es importante resaltar que Perú es el que ha tenido mayor proximidad a las problemáticas colombianas, ya que su territorio ha sido víctima de fenómenos similares a los colombianos debido a la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico e igualmente de grupos terroristas como el Sendero Luminoso que generaron gran inestabilidad en la sociedad peruana.

Desde el inicio de la presidencia de Álvaro Uribe y el desarrollo de la PSD se recibió apoyo por parte del gobierno de Alejandro Toledo de Perú, muestra de ello las palabras del mandatario colombiano en 2004 refiriéndose a su homólogo peruano: “no he encontrado vacilación ni duda, no he encontrado cálculo ni malicia; en usted lo que he encontrado es firmeza para apoyar la lucha antiterrorista de Colombia” (Rojas 2005, pág.100)

Así pues las relaciones colombo peruanas desde el inicio de la PSD estuvieron marcadas por el apoyo y cooperación entre ambas naciones, ya que al existir amenazas comunes como el narcotráfico y la prevalencia de organizaciones criminales en ambos Estados se hizo necesario generar mecanismos que garantizaran la estabilidad en ambos países.

Para el realismo defensivo la anarquía genera que los Estados inicien mecanismos de cooperación para garantizar su supervivencia (Taliaferro 2000 -2001, pág.137). Dicho supuesto permite entender las dinámicas de las relaciones colombo peruanas, pues a lo largo de las administraciones de Toledo y García se adelantaron mecanismos bilaterales para hacer frente al narcotráfico y terrorismo.

Robert Jervis establece que las respuestas generadas por un Estado ante el dilema de seguridad no solo responden a un carácter estructural sino también a las dinámicas domésticas de cada Estado, por lo cual “existe un vínculo fuerte entre las políticas domésticas con la política exterior” (Jervis 1978, pág. 168). Así pues la experiencia peruana en la lucha contra el terrorismo, permitió al Estado brindar apoyo y cooperación a Colombia en materia de seguridad.

Uno de los factores que generó mayores reacciones en la región frente a las políticas de seguridad colombianas fue el alineamiento con Estados Unidos, pues tal como establece Taliaferro las alianzas pueden cambiar la percepción respecto a un adversario y por tanto son un factor que aumentan o mitigan el dilema de seguridad. En los casos de Venezuela y Brasil dicho alineamiento se consagró como un punto de tensión que aumentó el dilema y la percepción de inseguridad, pues se veía que el acercamiento entre Colombia y Estados Unidos era un mecanismo para que la nación norteamericana tuviese influencia e ingerencia en asuntos suramericanos y por tanto generaría desestabilización y una posible pérdida de soberanía en ciertos asuntos.

Sin embargo para Perú el acercamiento con Estados Unidos fue un factor que permitió la mitigación del dilema de seguridad, ya que esta nación suramericana ha mantenido fuertes vínculos con Estados Unidos desde hace más de un siglo y tras el retorno de la democracia en Perú, las relaciones bilaterales se han estrechado y se han aumentado los temas en la agenda “producto de la convergencia de valores y principios referidos a la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y el respeto por las libertades” (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 2015, párr. 12).

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad del Estado peruano frente a la existencia del crimen organizado y al narcotráfico, se hizo necesario que las administraciones peruanas generaran mecanismos de cooperación interestatal con el fin de hacerle frente a dicho problema, para ello no solo se afianzaron las relaciones bilaterales con Colombia sino que también se recibió “apoyo militar e inteligencia sobre temas relacionados al narcotráfico y control para la exportación de drogas” (Castaño 2012, pág.41) por parte de Estados Unidos.

Adicionalmente la percepción de inseguridad en Perú fue mitigada gracias a los múltiples esfuerzos binacionales para mantener la confianza y a los intereses y amenazas compartidas por ambas naciones, pues tal como establece Jervis “cuando un Estado no considera al otro un adversario sino que tienen suficientes intereses en común como para ser aliados, puede recibir de buena manera un aumento de poder del otro” (Jervis 1978, pág.175), muestra de ello las declaraciones de Toledo en donde apoyaba los esfuerzos de pacificación emprendidos por el gobierno Uribe con el fin de garantizar la seguridad y consolidar el Estado de derecho (Rojas 2005, pág.112)

A pesar del cambio de Gobierno y la llegada de Alan García a la presidencia en Perú se mantuvo la cordialidad y cooperación con Colombia, incluso las relaciones entre los mandatarios se estrecharon y se generó un ambiente de respaldo frente a las decisiones tomadas con el fin de preservar la estabilidad del territorio.

Tal como se ha mencionado a lo largo de la presente monografía, el punto más álgido de las relaciones colombianas con el resto de la región fue el desarrollo de la Operación Fénix, acción ante la cual el Estado peruano manifestó su rechazo al igual que el resto de los Estados vecinos, demostrando así que “entre mayor sea la compulsión generada por un evento, mayor homogeneidad en el accionar de los jefes de Estado” (Jervis 1976, pág.20). Sin embargo tras dicho acontecimiento Alan García anunció que buscaría acciones específicas interamericanas contra el terrorismo (Vieira 2008,párr.7)

El Estado peruano fue el único de la región que decidió calificar a las FARC como una organización terrorista e incluso afirmó que en coordinación con el gobierno de Colombia trabajarían para "impedir cualquier huida, cualquier ocultamiento de los terroristas de las FARC en territorio peruano" (Agencia voces del secuestro 2010, párr.4).

Finalmente el acuerdo militar colombo estadounidense referente a las bases militares en 2009 fue otro punto que generó desconcierto en la región, la excepción a dicho rechazo fue Perú ya que sus vínculos históricos con el país del norte y la cooperación que recibe de este evitaron que se generara una percepción de inseguridad por la presencia de militares norteamericanos en el Estado vecino.

Incluso durante la gira emprendida por Álvaro Uribe para explicar los alcances del acuerdo, realizó una visita oficial a su homólogo peruano quien tras dicha reunión declaró ,refiriéndose al presidente colombiano: “La historia reconocerá mucho y muy pronto lo mucho que ha hecho usted por Colombia y por todo el continente. Siempre estaremos respaldando el trabajo fundamental que ha hecho usted” (Redacción Política 2009,párr.4)

Así pues se puede afirmar que Perú se consagró como el aliado colombiano en la región, consolidando una relación basada en la cooperación y respaldo en lo referente a temas de seguridad y favoreciendo la el alineamiento con Estados Unidos para el combate de fenómenos como el terrorismo y el narcotráfico; por lo anterior se hace necesario analizar los mecanismos implementados por Perú con el fin de reforzar las relaciones bilaterales con Colombia.

4.2 Lucha contra las amenazas bilaterales: Mecanismos de cooperación.

A pesar de los mecanismos implementados por Colombia para conseguir estabilidad y seguridad en su territorio, no fue considerado por el Estado peruano como una amenaza para su proyecto político ni para su integridad territorial, sin embargo la situación colombiana respecto a la criminalidad y terrorismo eran considerados como una amenaza latente para el Estado, lo anterior se expone en el Libro Blanco de la Defensa Nacional en donde se establece que el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia internacional se consagran como amenazas externas (Ministerio de Defensa del Perú 2005a, pág. 63).

Por lo anterior las respuestas peruanas surgieron con el fin de hacer frente a dichas amenazas y no al Estado colombiano, pues tal como se mencionó anteriormente el alineamiento con Estados Unidos y las percepciones bilaterales se logró mitigar el dilema de seguridad y por tanto implementar mecanismos de cooperación de tipo bilateral.

Una de las primeras acciones del gobierno Toledo con el fin de contener el accionar terrorista en su territorio fue el refuerzo de la militarización en la zona de frontera e igualmente se destacan en el 2002 la creación del Mecanismo de Alto Nivel de Seguridad y Cooperación Judicial [MAN] y el Grupo de Trabajo Bilateral para Asuntos Policiales [GTBP], instancias en las cuales se examinaron asuntos relativos “al terrorismo, el problema mundial de las drogas y delitos conexos, el tráfico de armas, la corrupción, entre otras actividades ilícitas” (Ministerio de la Defensa del Perú 2005b, pág. 40)

A pesar de que el dilema de seguridad con Perú tuvo mitigaciones, la anarquía del sistema internacional produce incertidumbre frente a la intenciones futuras de los Estados (Taliaferro 2000 -2001, pág.136), por lo cual se hace necesario que se tomen medidas con el fin de controlar dicha incertidumbre.

Tal como establece Robert Jervis los altos niveles de comunicación y las reuniones frecuentes entre los líderes de los Estados son mecanismos que permiten mayor confianza respecto a las acciones del otro Estado (Jervis 1992, pág.721). Dicho supuesto permite comprender la actitud peruana respecto a Colombia, pues la creación de diversos mecanismos

de cooperación bilateral permitían al Estado peruano tener mayor contacto con las autoridades colombianas y por tanto tener mayor información respecto a las estrategias de lucha contra la ilegalidad por parte de Colombia, disminuyendo así la incertidumbre y la desconfianza resultante de la ausencia de transparencia en la información.

Uno de los aspectos destacables durante la administración de Toledo fue la formulación del Libro Blanco de la Defensa Nacional, el cual se constituyó como el pilar fundamental frente a la conducción del Estado en materia de seguridad, por lo cual en dicho texto se evidencian las amenazas internas y externas del Perú y se establecen la organización y funciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas [CCFFAA].

Según el Libro Blanco de la Defensa, las amenazas externas del Perú son el resultado de las dinámicas generadas por los grupos ilegales, entre ellos los pertenecientes al crimen organizado, al terrorismo y al narcotráfico, por lo cual se hizo especial énfasis en el desarrollo de estrategias de cooperación. Así pues se estableció que la misión del CCFFAA es “organizar y ejecutar el planeamiento, coordinación, preparación y conducción de las operaciones conjuntas del más alto nivel en los frentes interno y externo” (Ministerio de la Defensa del Perú 2005c, pág. 9).

Con el fin de llevar a cabo las funciones del CCFFAA el gobierno de Toledo habilitó el territorio nacional para llevar a cabo operaciones militares de entrenamiento e investigación científica conducidas por militares estadounidenses y colombianos (Rojas 2005, pág.114).

Durante la presidencia de Alan García se mantuvo la tendencia de crear y fomentar mecanismos de apoyo de tipo bilateral, a título de ejemplo en 2007 se creó el Mecanismo de Consulta y Coordinación Política 2+2 que es la más alta instancia de diálogo y decisión política, donde se definen los grandes lineamientos en materia de seguridad y defensa (Embajada de Colombia en Perú s.f, párr. 1), durante los encuentros programados de dicho mecanismo se reúnen los Ministros de Defensa y los Cancilleres de ambos Estados para lograr coordinar acciones en zona de frontera y compartir información de gran importancia para la lucha contra el narcoterrorismo.

Teniendo en cuenta que la frontera colombo peruana ha sido utilizada por los grupos irregulares para el desarrollo de sus actividades delictivas, especialmente los relacionados con el narcotráfico, ambos Estados crearon en 2007 la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFROM), la cual tiene por objeto el fortalecimiento de las relaciones de las Fuerzas Armadas con el fin de luchar contra el tráfico de armas, de personas y contribuir en la lucha global contra el narcotráfico (Ejército Nacional 2013, pág. 4)

Otro de los puntos interesantes para el análisis de las respuestas peruanas frente al dilema de seguridad ocasionado por Colombia es el gasto militar del Estado peruano durante los años 2002-2010. Según el SIPRI los incrementos anuales efectuados por Perú en materia de gasto militar fueron muy bajos comparados con otros Estados de la región. Así pues en 2003 el gasto militar peruano se estimó en 889 millones de dólares anuales y en 2010 de 1958 millones de dólares, generando un aumento de cerca de 1100 millones en 8 años, situación que al compararse con Estados como Venezuela y Brasil resulta mínima. Adicionalmente la variación del gasto militar respecto al PIB demuestra que durante dicho periodo el sector defensa recibió muy poca inversión e incluso en algunos años se evidencia una caída en cuanto al presupuesto destinado del PIB a dicho sector; en el 2002 el sector defensa recibió 1,5% del PIB y en el 2010 el gasto cerró en 1,3%, las variaciones del gasto militar del 2002 al 2010 oscilaron entre el 1,1% y el 1,5%.

Por lo anterior es posible evidenciar que el Estado peruano al generar mecanismos de cooperación bilateral no tuvo la necesidad de optar por un aumento abrupto en los gastos para el sector defensa, pues al ejercer acciones conjuntas con su aliado regional (Colombia) logró combatir las amenazas que afectan a ambos Estados.

5. CONCLUSIONES

La administración de Álvaro Uribe Vélez a través de la PSD se concentró en retomar el control estatal sobre territorios dominados por los grupos narcoterroristas, para ello favoreció la implementación de medidas de tipo militar como el fortalecimiento de las fuerzas armadas a través del incremento de capacidades, aumento presupuestal, intensificación de las acciones y la formulación de estrategias de recuperación territorial como el Plan Patriota.

Tal como se analizó a lo largo de la presente monografía la implementación de la PSD en Colombia generó un ambiente de incertidumbre y desconfianza en la región, pues generó un dilema de seguridad en donde Colombia al incrementar su nivel de seguridad terminó disminuyendo la seguridad de sus Estados vecinos, no solo a través de un posible efecto derrame de la amenaza terrorista sino también a través de acciones efectuadas por las fuerzas armadas colombianas en zona de frontera e incluso en territorio de otros Estados.

Igualmente es posible establecer que en el análisis de las respuestas dadas por Venezuela, Brasil y Perú respecto a dicho dilema los jefes de Estado son un factor determinante, pues son quienes interpretan el dilema y toman medidas para hacer frente a él. Adicionalmente la vulnerabilidad percibida por cada jefe de Estado, por lo cual es posible evidenciar que a pesar de existir una amenaza común, los tres Estados actuaron de manera totalmente diferente y tomaron decisiones teniendo en cuenta factores como el proyecto político, las dinámicas domésticas y su proyección internacional.

Otro de los puntos que demuestra las divergencias en las decisiones en política exterior es lo referente a las alianzas o alineamientos, pues se convierten en elementos que aumentan o disminuyen la percepción de amenaza entre los Estados, a título de ejemplo el alineamiento colombo-estadounidense resultó siendo un detonador de desconfianza y percepción de vulnerabilidad para Venezuela y Brasil, mientras que para Perú dicho alineamiento se consagró como un punto clave para disminuir la percepción de amenaza causada por Colombia.

Igualmente es posible concluir que existen situaciones en que los Estados prefieren cooperar a pesar de existir la condición de anarquía que los lleva al self help, pues mantener una relación directa y constante con una posible amenaza se convierte en un mecanismo ideal para aumentar la transparencia, por ello Brasil propuso la creación del CSD como una instancia en donde se evitaran situaciones como la ocurrida durante la Operación Fénix e igualmente desarrolló mecanismos de tipo bilateral con el fin de tener una cercanía constante con Colombia.

Por el lado de Perú se implementaron medidas de tipo bilateral para luchar en contra de una amenaza común y mediante dichos mecanismos se logró un ambiente de cooperación y confianza que permitió disminuir la percepción de amenaza resultante del dilema de seguridad.

El capítulo dos evidencia que la predisposición de un jefe de Estado por ver a otro Estado como una amenaza es fundamental a la hora de hablar del dilema de seguridad, pues teniendo en cuenta que el sistema internacional es anárquico y que no se tiene certeza frente a las intenciones futuras del otro, los jefes de Estado tienden a pensar en el peor de los casos y por ello inician mecanismos de Self Help generando una espiral de conflicto con el otro. Pues el aumento en las capacidades de uno termina generando que el otro Estado incurra en la misma práctica con el fin de sentirse menos inseguro.

Adicionalmente, el caso venezolano permite confirmar que las dinámicas domésticas son fundamentales a la hora de tomar decisiones en política exterior, pues al existir un sector de oposición al régimen, el jefe de Estado siente mayor fragilidad y vulnerabilidad frente a un ataque, muestra de ello las tesis desarrolladas en Venezuela en las cuales se expone que Colombia y Estados Unidos generarían una alianza estratégica con los grupos de oposición con el fin de derrocar el régimen.

A pesar de que las relaciones colombo venezolanas han sido poco cordiales en diferentes momentos de la historia, la relación de cooperación entre Colombia y Estados Unidos intensificó la percepción de inseguridad y por ello se generaron mecanismos de self help con el fin de garantizar la supervivencia del Estado.

El capítulo tres evidencia que un Estado dependiendo de su proyecto genera diferentes respuestas ante una posible amenaza, pues Brasil como líder regional aprovechó el dilema de seguridad generado por Colombia para tomar posturas que confirmaran su papel en la región, en un primer momento se proyectó como mediador entre Colombia y Estados como Venezuela y Ecuador y posteriormente propuso la creación del CSD para generar una Balanza de Poder entre Colombia y el resto de la región.

Igualmente el caso brasilero permite concluir que en condición de anarquías los Estados utilizan diferentes técnicas para asegurar su self help, por ello fortaleció su aparato militar e incluso promovió la ampliación de su industria militar para no depender de otros y por el contrario convertirse en un Estado clave en el escenario regional en materia de seguridad y defensa.

Finalmente el caso peruano permite asegurar que existen mecanismos que permiten la atenuación del dilema de seguridad, a pesar de que no se elimina por completo si se

disminuye gracias a acciones clave como la cooperación. El caso peruano es excepcional ya que se consolidó como el aliado colombiano en la región y por tanto agudizó los mecanismos de intercambio de información, garantizando así la transparencia en la relación bilateral.

Adicionalmente demuestra que los alineamientos se consolidan, en algunas oportunidades, como factores que reducen la incertidumbre y la percepción de vulnerabilidad, pues al tener a Estados Unidos de aliado común con Colombia, las relaciones bilaterales en materia de seguridad se desarrollaron en mejor término que con el resto de la región.

Así pues la presente monografía permitió evidenciar que existen diferentes respuestas ante una situación objetiva, pues a pesar de que Colombia generó un dilema de seguridad al buscar su propia seguridad, Venezuela, Brasil y Perú generaron reacciones totalmente diferentes y en algunos casos la percepción de seguridad pudo ser disminuida y en otros, por el contrario, fue aumentando con el paso del tiempo.

Finalmente la investigación llevada a cabo permite afirmar que los supuestos del realismo defensivo y el neorrealismo permiten evidenciar la situación generada en el vecindario colombiano tras la implementación de la PSD y que a pesar de que las acciones encaminadas a la seguridad nacional son competencia exclusiva de cada Estado, terminan repercutiendo en el accionar de los demás Estados debido a que se generan percepciones de amenaza y un dilema de seguridad en donde el aumento de las capacidades de uno disminuyen la seguridad del otro.

BIBLIOGRAFÍA

Jervis, R. (1976). *Perception and misperception in international politics*. Princeton University Press

Garrido, A. (2005). *La guerra (asimétrica) de Chávez*. Caracas: ALFADIL.

Garrido, A. (2006). *Chávez, Plan Andino y Guerra Asimétrica*. Caracas: El Nacional.

Santos, J. (2009). *Jaque Al Terror: Los años horribles de las FARC*. Bogotá: Planeta.

Capítulos de Libros

Illera, L., y Ruiz, J. (2008). Colombia – Venezuela: dos maneras de comprender la seguridad. En E. Pastrana, C. Wieland, y J. Vargas , *Vecindario agitado Colombia y Venezuela entre la hermandad y la conflictividad* (págs. 193-220) . Bogota: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Márquez, M. (2008). El liderazgo populista de Chávez, su discurso y las relaciones colombo-venezolanas. En E. Pastrana, C. Wieland, y J. Vargas , *Vecindario agitado Colombia y Venezuela entre la hermandad y la conflictividad* (págs. 193-220) . Bogota: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Pastrana, A. (2005). *La Palabra Bajo el Fuego* . Bogotá: Planeta.

Pérez, J. (2008). Plan Estratégico. En J. Pérez, *Raul Reyes el Canciller de la montaña* (págs. 29-54) . Bogotá: Norma.

Pérez, J. (2008). La Operación Fénix. En J. Pérez, *Raul Reyes el Canciller de la montaña* (págs. 251- 275) . Bogotá: Norma.

Pizarro, E. (2011). *Las FARC (1949-2011) De guerrilla campesina a maquina de guerra*. Bogotá: Norma.

Ramirez, S. (2006). Colombia y Venezuela: ¿de una aguda tensión a una asociación estratégica?. En S. Ramirez , y J. Cadenas, *Colombia- Venezuela: retos de la convivencia* (págs. 23-52) . Bogota: Universidad Nacional de Colombia.

Rangel, A. (2010). El éxito de la Seguridad Democrática. En A. Rangel, y P. Medellín, *Cara & Sello Política de Seguridad Democrática* (págs. 1-97) . Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Saint-Pierre, H. (2008). Brasil: Política Externa y Defensa Regional. En O. d. Seguridad, *Limites y desafíos de la agenda de seguridad hemisférica* (págs. 73- 82) . La Paz. Disponible en: <http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Hemispheric%20Security.pdf>

Sanin, J. (2008). Colombia- Venezuela: la hiperinflación del ejecutivo. En E. Pastrana , C. Wieland, y J. Vargas, *Vecindario agitado Colombia y Venezuela entre la hermandad y la conflictividad* (págs. 57 – 90). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Publicaciones periódicas académicas:

Colgan, J. (2011). Venezuela and military expenditure data. *Journal of peace research*, 48 (4), 547-556

Hernandez, C. (2009). Venezuela Seguridad y Defensa 2009. *Tecnología Militar TECMIL* (4),

Jervis, R. (1978). Cooperation Under The Security Dilemma. *World Politics*, 30 (2), 167-214.

Jervis, R. (1985). From balance to concert: A study of international security cooperation. *World Politics*, 38 (1), 58-79

Jervis, R. (1992). A Political science perspective on the balance of power and the concert. *The American Historical Review*, 97 (3), 716- 724.

Pastrana, E. (2011). Evoluçāo E Perspectivas Das Relacōes Entre A Coloēmbia E O Brasil . *Plataforma Democrática* (14), 2-18

Ramirez, S. (Diciembre de 2009). A Colōmbia e o Brasil, separados (e unidos) pelo comércio e pela segurança. *Nueva Sociedad* , 90-107

Rojas, I. (2004). La crisis colombiana y Perú. *Colombia Internacional*, (60), 98-123.

Romero, C. (2006). ¿una relación esquizofrénica? *Revista Nueva Sociedad* (206), 78-92

Taliaferro, J. (2000 -2001). Security Seeking under anarchy: Defensive realism revisited. *International Security*, 25 (3), 128-161

Publicaciones periódicas no académicas.

Atentados terroristas sacuden posesión del presidente Alvaro Uribe. (05 de Agosto de 2002). *Revista Semana* , Disponible en: <http://www.semana.com/noticias/articulo/atentados-terroristas-sacuden-posesion-del-presidente-alvaro-uribe/53466-3>.

Chávez defiende a las FARC: "Son un ejército, no son terroristas". (12 de Enero de 2008). *El Clarín*
. Disponible en: <http://edant.clarin.com/diario/2008/01/12/elmundo/i-03301.htm>

Chávez y Uribe: un novelón de peleas y reconciliaciones. (29 de Julio de 2009). *La Silla Vacía*,
Disponible en: <http://lasillavacia.com/historia/3348>

Corte Constitucional le dijo no al acuerdo militar con Estados Unidos. (17 de Agosto de 2010).
Revista Semana , Disponible en:
<http://www.semana.com/buscador?query=corte%20constitucional%20dijo%20no%20acuerdo%20militar%20estados%20unidos>

El disgusto de Ecuador por las fumigaciones con glifosato.(13 de Diciembre de 2006). *Revista Semana* .Disponible en: <http://www.semana.com/on-line/articulo/ecuador-muestra-su-disgusto-con-colombia-por-las-fumigaciones-con-glifosato-llama-su-embajador-consultas/82643-3>

Expectativa por resultados de la “gira muda”. (9 de Agosto de 2009). *Revista Semana* , Disponible en: <http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso154531-expectativa-resultados-de-gira-muda>

Fernandez, J. (24 de 11 de 2004). La participación de España y de EEUU en el golpe de Estado en Venezuela. *El Mundo*, Disponible en:
<http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/24/espana/1101319375.html>

Las Farc en Venezuela, ocho años de evidencias. (15 de 07 de 2010) *Revista Semana* . Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/las-farc-venezuela-ocho-anos-evidencias/119320-3>

Las Farc tienen "bases" permanentes en Brasil. (10 de Mayo de 2010). *El Espectador* , Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/farc-tienen-bases-permanentes-brasil-articulo-203499>

Lissardy, G. (7 de Junio de 2011). Sudamérica, la región del mundo en donde más crece el gasto militar. *BBC* , Disponible en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110607_sudamerica_gasto_militar_az.shtml

Llevar tema de bases de E.U. en Colombia a Consejo Sudamericano de Defensa proponen Lula y Bachelet. (30 de Julio de 2009). *El tiempo* , Disponible en :
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5733487>

Lo que hizo las Farc en Cundinamarca. (s.f.). *Verdad Abierta.* Disponible en:
<http://www.verdadabierta.com/la-historia/4415-los-crime-nes-de-las-farc-en-cundinamarca->

Lula pide transparencia en las negociaciones. (7 de Agosto de 2009). *La República* , Disponible en:
<http://archivo.larepublica.pe/07-08-2009/lula-pide-transparencia-en-negociaciones>

Peixoto, F. (5 de Agosto de 2009). “Bases en Colombia recuerdan la Guerra Fría”. *BBC* , Disponible en:
http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/08/090805_bases_colombia_brasil_lh.shtml

Que las bases militares no se extralimiten: Lula. (06 de Agosto de 2009). *Revista Semana* ,
Disponible en:
<http://www.semana.com/buscador?query=bases%20militares%20no%20extralimiten%20lula>

Vieira, C. (4 de Abril de 2008). Colombia: ¿Terrorismo o beligerancia? . *Inter Press Service*,
Disponible en: <http://www.ipsnoticias.net/2008/03/colombia-terrorismo-o-beligerancia/>

Otros Documentos:

Agencia voces del secuestro. (2 de Febrero de 2010). Perú califica a las FARC como grupo terrorista
[web]. http://www.lasvocesdelsecuestro.com/noticias_detalle.php?id=2211

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2005). *Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional*. Caracas.

Campuzano, A. (2010). *La estrategia exterior de seguridad y defensa de Brasil (2001 - 2008) como elemento de proyección hacia Suramérica. Caso de estudio: promoción del Consejo Suramericano de Defensa.* (Tesis de Grado). Recuperado del Repositorio institucional de la Universidad del Rosario

Cardenas, M. (2013). *Análisis de la política exterior en materia de seguridad de brasil en el periodo 2003-2009, como medio para consolidar su liderazgo en sudamérica.* (Tesis de Grado). Recuperado del Repositorio institucional de la Universidad del Rosario

- Carrillo, P. Fallido proceso de paz en Colombia con el grupo terrorista de las FARC cumple 10 años. [Archivo de Video] (21 de Febrero de 2012). *Disponible en:* http://www.dailymotion.com/video/xoxfq6_fallido-proceso-de-paz-en-colombia-con-el-grupo-terrorista-de-las-farc-cumple-10-anos_news . Bogotá, Colombia: El Informativo NTN24.
- Castaño, S. (2012). *Dinamicas De Seguridad Para La Construcción De Una Agenda Comúm En Los Andes (2001-2010)*. (Trabajo de Grado). Recuperado del repositorio institucional de la Universidad Javeriana.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). *Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC (1949-2013)*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Chávez , H. (2006). Apartes del discurso de Hugo Chávez Frias ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En M. d. Colombia, *Política Exterior de Colombia Documentos Enero-Julio 2005*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Ejercito Nacional . (2013). *Procedimiento Relaciones Internacionales*. Bogotá.
- Embajada de Colombia en Perú . (s.f). *Mecanismos Bilaterales entre Colombia y Perú*. Recuperado el 16 de Junio de 2015, de Cancillería: http://peru.embajada.gov.co/colombia/mecanismos_bilaterales
- Florez , J. (2012). *La Doctrina Conjunta En Colombia: Analisis De La Fuerza De Tarea Conjunta Omega*. (Tesis de Maestría) Recuperado del repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia. .
- Herrera, L. (2011). *Implicaciones de la amazonía en la política exterior de Brasil*. (Tesis de Grado) Recuperado del repositorio institucional de la Universidad Javeriana.
- Jervis, R. (2015). Colombian Student interested in your theory [correo electrónico].
- Ministerio de Defensa Nacional [Mindefensa]. (2009). *Gasto en Defensa y Seguridad 1998-2007*. Bogotá: Ministerio de Defensa Nacional.
- Ministerio de Defensa Nacional [Mindefensa]- Presidencia de la República [DAPRE]. (2003). *Política de Defensa y Seuridad Democrática*. Bogotá .

- Ministerio de Defensa Nacional [Mindefensa]. (2006). Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Bogotá.
- Ministerio de Defensa de Brasil. (18 de Diciembre de 2008). Estrategia Nacional de Defensa.
- Ministerio de la Defensa del Perú. (2005). Introducción. En M. d. Perú, Libro Blanco de la Defensa Nacional. Lima.
- Ministerio de la Defensa del Perú. (2005). Capitulo I: Globalización y Cambio. En M. d. Perú, Libro Blanco de la Defensa Nacional. Lima.
- Ministerio de Defensa del Perú. (2005a). Capítulo III: Política de seguridad y defensa nacional. En M. d. Perú, Libro Blanco de la Defensa Nacional. Lima.
- Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (2015). Relaciones Bilaterales de Perú y Estados Unidos. Obtenido de Perú Política Exterior:
<http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Paginas/Relaciones-Bilaterales-Estados-Unidos.aspx>
- Moreira, A. (2008). *Consejo Sudamericano De Defensa: Hacia Una Integración Regional En Defensa*. RESDAL.
- Oficina de Prensa Fuerza Aérea Colombiana. (21 de Mayo de 2005). Fuerzas Aéreas de Brasil y Colombia unidas. Recuperado el 22 de Mayo de 2015, de Fuerza Aérea Colombiana:
<https://www.fac.mil.co/fuerzas-aereas-de-brasil-y-colombia-unidas-0>
- Pastrana , A. Final Proceso de Paz - Alocución Presidencial - Febrero 20.2002. [Archivo de Video] (20 de Febrero de 2002). Disponible en: <https://vimeo.com/27208756> . Bogotá, Colombia
- Presidencia de la República [DAPRE]. (7 de Marzo de 2003). Comunicado conjunto para la prensa de los presidentes de la Republica Federativa del Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva y de la Republica de Colombia, Alvaro Uribe Velez. Recuperado el 22 de Mayo de 2015, de Histórico Presidencia - Archivo:
http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/documentos/2003/enero/brasil.htm
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2015). *Military Expenditure*. Obtenido de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): <http://www.sipri.org>
- Spies, V. (2014). o conflicto armado colombiano: desafios para a segurança regionail. (Tesis de Grado) Recuperado del repositorio institucional de la Universidade Federal de Santa Maria.